

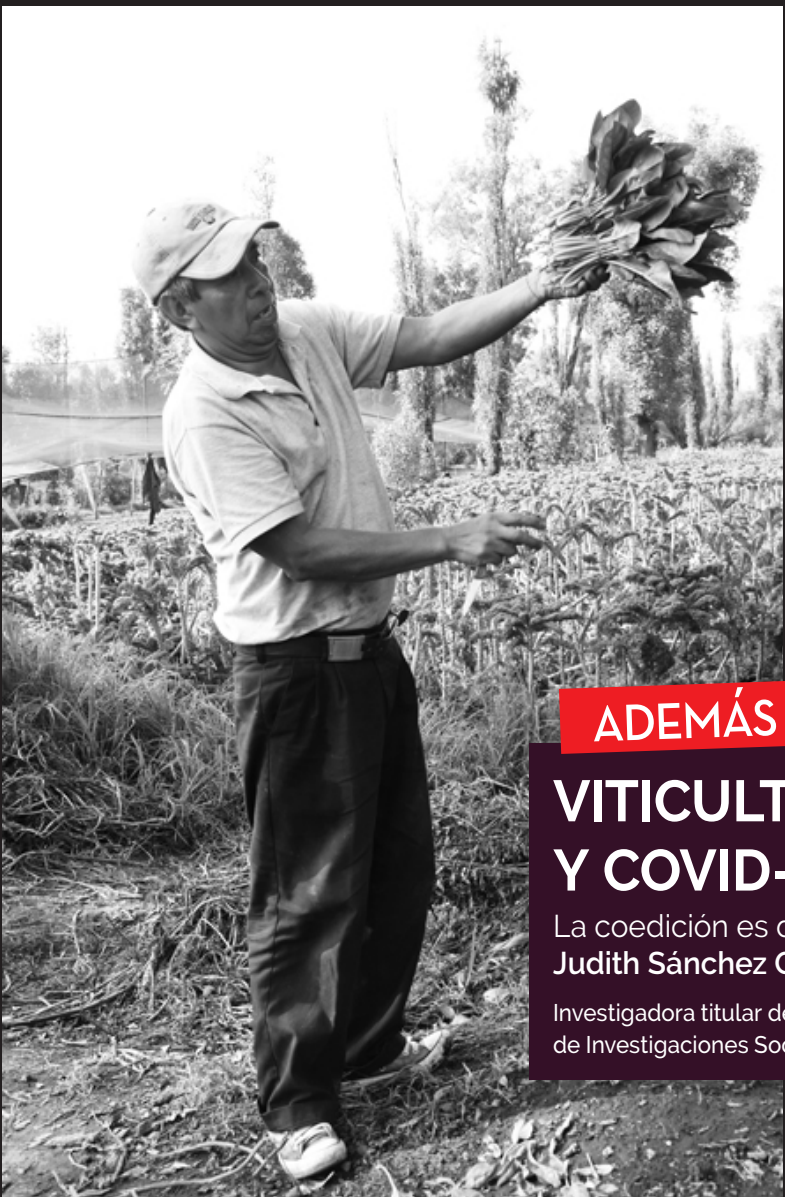


Fotografías: Joseph Sorrentino



TEMA DEL MES

CORONAVIRUS: LA VIDA SIGUE



ADEMÁS

VITICULTURA Y COVID-19

La coedición es de Martha
Judith Sánchez Gómez

Investigadora titular del Instituto
de Investigaciones Sociales, UNAM



EDITORIAL

Fastidiar al coronavirus
Por una historia sobrenatural1918. LA PRENSA
MUNDIAL Y LA
EPIDEMIA DE GRIPE.

España, Octubre 3, 1918. Se ha extendido hacia otros puntos de la península española la epidemia de gripe que afecta últimamente la región de Cataluña y de forma especial a la gran urbe de Barcelona. Alarmados ante el desarrollo de esta epidemia, que ya ha cobrado víctimas mortales, las autoridades han decidido adoptar urgentes medidas de carácter preventivo y paliativo. El Ayuntamiento ha aprobado un presupuesto especial y el claustro universitario ha declarado el cierre, por tiempo indefinido, de la Universidad.

Alemania, diciembre 31, 1918. Desde el mes de septiembre próximo pasado hasta la fecha, ya son 196 000 las víctimas mortales que ha cobrado la epidemia de gripe que se encarniza implacablemente sobre Alemania, sin que las medidas sanitarias que se habían adoptado hayan servido para detener la mortandad. En los Estados Unidos la situación también es gravísima, y las cifras de muertos a causa de la epidemia de gripe alcanzan la aterradora cantidad de medio millón. Es como si una ciudad de las proporciones de Barcelona hubiese sido aniquilada.

México, octubre 7, 1918. Se multiplican en Laredo los casos de influenza española, epidemia a la que hasta ahora se da este nombre y que causa numerosas víctimas. También en El Paso, Texas, y en Torreón hay un veinte por ciento de los habitantes enfermos.

México, octubre 9, 1918. Se ordena la cuarentena para el vapor Alfonso XII, que trae muchos enfermos de la influenza española. En un tramo inmediato al pueblo de La Piedad, están tirados como un rebaño, centenares de enfermos. En la Villa de Guadalupe hay 30 soldados atacados del mal. Los médicos no aciertan a definir de qué enfermedad se trata; las víctimas, antes de morir, arrojan sangre por la nariz y la boca. En la Comarca Lagunera mueren 300 personas en 48 horas y en Monterrey se calcula que hay 30 000 enfermos. En Ciudad Juárez el Hipódromo se ha convertido en lazareto y faltan médicos y medicinas...

Entre 1918 y 1919 la influenza española infectó a 500 millones (un tercio de la humanidad) y mató a 50 millones, entre ellos el poeta Guillaume Apollinaire. También enfermaron, pero sobrevivieron, las escritoras Virginia Woolf y Katherine Ann Porter.

Traigo a colación estas notas porque documentan el pasmo con que se vivía en el momento una pandemia comparable a la nuestra; no los balances históricos o las reflexiones a toro pasado, sino las inmediatistas y crudas versiones periodísticas.

Y hago esto porque creo que necesitamos empezar a transitar de las muy pertinentes y necesarias consideraciones epidemiológicas, ambientales, económicas, sociológicas, políticas... que ponen filtros disciplinarios entre nosotros y lo que nos está ocurriendo, a reconocer también lo que tiene de inédito para las últimas generaciones el que Ramonet ha calificado de "hecho social total" y que yo llamaría experiencia desnuda planetaria. Porque en estos días todo se mueve y debieran moverse igualmente algunas convicciones.

La presente crisis biosocial se expande a través del orden civilizatorio que hemos construido. Y algunos pensamos que nos obligará a transformarlo profundamente, pues sus males -que ya eran conocidos- muestran toda su virulencia a la hora de hacer frente a la pandemia. La economía del lucro, la desigualdad y polarización social, los intensos flujos de la globalización, el ecocidio en curso, el racismo colonialista, el sexismo patriarcal y el autoritarismo político se desenmascaran como nunca y causan sufrimiento y muerte evitables.

Por ejemplo; es vergonzoso y aterrador que la mayor potencia del mundo esté gobernada por un hombre capaz de decir públicamente y como presidente peligrosas incoherencias como la siguiente: "Sabes, si mantuvieran a la gente por más tiempo con los cierres, también vas a perder a la gente de esa manera. Y ya lo has hecho, estoy seguro... Pero ante el abuso de las drogas y, según dicen, el suicidio, hay muchas cosas diferentes. Solo para que sepan, no hay gran forma de ganar, de un modo u otro... El hecho de que estamos dejando



Vendrán los virus, vendrán, pero les haremos frente.



Escena durante la "gripe española".



No somos pura biología, somos sociedad.

que las personas salgan y vayan a sus trabajos, es porque tienen que hacerlo. Y sí, es posible que haya algunos muertos". Con la misma irresponsable ligereza el vicegobernador de Texas, dijo: "Los abuelos debieran sacrificarse y dejarse morir para salvar la economía". Sin duda, en este mundo algo tiene que cambiar.

Sin embargo, hay que reconocer que en el principio no fue la economía, no fue la pobreza, no fue la batalla por los mercados, no fueron las guerras, no fueron las trasnacionales, no fue el cambio climático y el deterioro medioambiental, no fue el racismo, no fue el patriarcado... fue un pinche virus que ni siquiera está vivo. Como en el caso de los terremotos y los tsunamis, en el origen de la pandemia está la naturaleza.

Para los antiguos las pestes eran un castigo de los dioses, debido, quizá, a las infracciones por nosotros cometidas, pero decidido por ellos y originado en ellos. En cierto modo sigue siendo así; somos responsables del modo en que la pandemia se propaga y maneja, pero su fuente está fuera; en la otredad radical que para la sociedad (cualquier sociedad) es la naturaleza, la interna y la externa. Por eso, además de malestar social, hay angustia ontológica. La pandemia nos remite a nuestra finitud biológica. Y lo hace de manera dramática, pues la muerte -que a todos nos

espera- en las pandemias nos busca, nos persigue, nos acosa... Y es selectiva, quiere sobre todo a los viejos y a los enfermos... me quiere a mí.

Hablemos a calzón quitado. Lo cierto es que un murciélago le pasó un virus a un pangolín y este a un humano que enfermó y contagió a otros. No es nada nuevo ni tiene que ver con la modernidad ni con el capitalismo: los virus zoonóticos llevan millones de años desafiando nuestras defensas.

Pero la naturaleza es sabia y este mutante se va contra los viejos y los enfermos, individuos débiles que la especie humana había acumulado en demasía y biológicamente eran un lastre. La humanidad saldrá del trance saneada y rejuvenecida. Podría decirse que la pandemia es una poda necesaria.

Pues no, porque sucede que los humanos ya no somos pura biología, somos sociedad, y no pensamos someternos así nomás a los crueles designios de madre natura, que para eso llevamos milenios tratando de domeñarla. Entonces nosotros, los humanos, nos empeñamos en defender a nuestros viejos y a nuestros enfermos fastidiando de esta manera al coronavirus y a su jefa la Pachamama. Y está bien, porque así nos afirmamos como humanidad, no contra la biología sino más allá de la biología.

La crisis de la modernidad y el legítimo rechazo a sus dislates tecnocientíficos, potenciados por la lógica del lucro y el mercado, nos estaba llevando a un ingenuo neonaturalismo pachamámico. La pandemia nos obliga a reconocer que los heroicos esfuerzos por contener y controlar a la naturaleza no son lastre sino aporte de la modernidad. No más hambrunas y pestes negras aniquiladoras por más que sean biológicamente racionales y necesarias. Nuestra historia ya no es historia natural sino sobrenatural, artificial, social... Vendrán los virus, vendrán, pero les haremos frente. •

A. Martha

La vulnerabilidad frente a la pandemia en las zonas rurales

Leonardo Bastida Aguilar

Las zonas donde mayor número de infecciones de COVID-19 se han registrado son los grandes núcleos urbanos como el oriente del valle de México, donde se concentran millones de habitantes en un par de alcaldías de la ciudad de México y algunos municipios del Estado de México. A nivel internacional uno de los mejores ejemplos es Nueva York, urbe transformada en el epicentro del nuevo coronavirus Sars-Cov 02 con más de 170 mil casos hasta principio de mayo.

Sin embargo, dentro de los propio Estados Unidos, y muchos otros países, se ha cuestionado que el impacto de la pandemia en las comunidades rurales no ha sido tomado en cuenta. Algunos análisis han mostrado que la dinámica social propia de estos lugares, ha generado un mayor aislamiento social, debido a que son pocos los espacios de convivencia, los servicios de salud son escasos y la generación de un pánico colectivo en el que ante la falta de registro de casos, muchas comunidades han optado por cerrar el paso por sus territorios.

En Latinoamérica se ha identificado que la gran mayoría de las comunidades rurales viven en situación de pobreza y, a diferencia de las poblaciones urbanas, hay poco hacinamiento. Sin embargo, hay mayores distancias por recorrer para acceder a los servicios públicos, entre ellos los de salud. En algunos casos, teniéndose que recorrer rutas que podrían requerir varias horas. Sumado a la vulnerabilidad sistemática enfrentada por sus habitantes, muchos de ellos de origen indígena, a través de factores como la discriminación y la exclusión, según el reporte *Respuesta a la pandemia de COVID-19 en poblaciones urbano-marginales y rurales en América Latina*, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

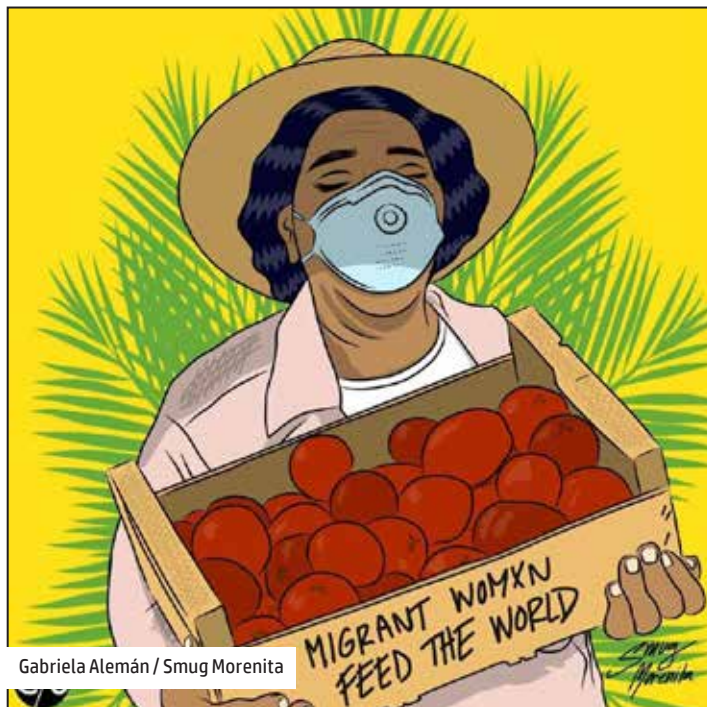
México rural

A lo largo y ancho de la República Mexicana hay más de 188 mil comunidades con menos de dos mil 500 habitantes. El último censo de población, elaborado en 2010, reveló que alrededor de 26 millones de personas habitan en este tipo de poblaciones, las cuales son consideradas como rurales. Casi 70 por ciento de ellas cuentan con una población menor a 49 habitantes y menos de mil tienen más de dos mil habitantes.

Geográficamente, la mayoría están ubicadas en las zonas centro y sur. Sobre todo en el sureste, pues en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tabasco, cerca de la mitad de

la población vive en localidades rurales. Y en el área centro, en entidades como Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz registran entre dos terceras partes y casi la mitad de la población habitando en poblados de este tipo.

Algunas características de estas comunidades son que ya no sólo se enfocan a la realización de actividades económicas primarias sino que se han agregado actividades forestales y pesqueras, además de actividades secundarias y terciarias; una carencia de acceso a tierra por parte de los



Gabriela Alemán / Smug Morenita

jóvenes; una mayor participación por parte de las mujeres; un índice de pobreza extrema de casi 20 por ciento; una segmentación de las tierras en parcelas menores a cinco hectáreas, grandes tasas de migración para llevar a cabo labores como jornaleros en los estados del norte del país o en Estados Unidos y una combinación de altas tasas de desnutrición en población infantil y de sobrepeso u obesidad, en población adulta.

COVID-19 en la ruralidad mexicana

Desde hace tres meses el mapa de México se ha coloreado en diferentes tonalidades de verde para ubicar aquellas entidades federativas en las que mayores índices de personas con COVID-19, conforme a los datos que todos los días comparte la Secretaría de Salud federal.

Sobre los estados con mayor población en comunidades rurales, las cifras gubernamentales muestran que son los que menores registros de infecciones tienen. Zacatecas, con menos de 200 hasta el comienzo de mayo. En igual medida, Chiapas y Oaxaca con alrededor de 250 registros y Guerrero, con casi 400, al igual que Hidalgo. Las excepciones podrían ser Tabasco y

Veracruz, aunque la mayoría de los casos han sido detectados en sus áreas urbanas.

Ante tales estadísticas, se plantea la duda sobre si en realidad, en estas comunidades hay muy pocos casos, o más bien, hay una escasez de labores de detección y atención. En general, las cifras oficiales han sido ampliamente cuestionadas, por lo que investigadores de diferentes institutos, centros y programas de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México implementaron su propio sistema de medición, basado en la recopilación de estadísticas a nivel nacional, estatal y municipal, ofreciendo datos como los casos inferidos e información de cada municipio del país.

De esta manera, es posible, dar seguimiento a lo que ocurre en cada uno de los 2458 municipios existentes en México, observándose, que en muchas de las áreas rurales del país aún no se han notificado casos, pero que en zonas cercanas a ellas, hay registros, por lo que no se descarta una posible transmisión en algún momento.

Vulnerabilidades

A partir de estos datos, un grupo de investigadores elaboró un Índice de Vulnerabilidad en México ante la COVID-19, el cual mide las condiciones vulnerables de cada municipio a nivel demográfico, de salud y socioeconómico.

Mediante la conjunción de estos elementos que permiten conocer las características de la población, en específico, las socioculturales, para saber las posibilidades de acceso a los recursos de información; la infraestructura y servicios hospitalarios y al personal médico disponibles en cada municipalidad, y el bienestar de la población en términos de satisfactores básicos, derechos y capacidad económica, se determinó que había grados de vulnerabilidad media, alta, muy alta y crítica.

Así, el grupo de investigadores, que incluye geógrafos, médicos, epidemiólogos, matemáticos, geofísicos, entre otras especialidades, halló que 7.5 por ciento de la población nacional presenta un grado crítico de vulnerabilidad frente a la pandemia, debido a que habita en municipios rurales, donde se registra un porcentaje alto de personas mayores de 60 años y un grueso significativo de población indígena. Sumado a que, en la mayoría de esos municipios, hay escasos servicios de salud y presentan tasas de marginación muy por arriba de la media nacional.

La mayoría de estos municipios se encuentran localizados en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, la Huasteca veracruzana y poblana, así como en el sur de Durango, Sierra Rarámuri de Chihuahua y Yucatán, donde el acceso a los servicios básicos es muy limitado.

En estos municipios en situación crítica si bien es cierto que no hay casos de COVID-19 registrados hasta el momento, el impacto de la pandemia puede ser muy negativo para la economía local, advierte el documento, que a manera de recomendación, señala que se tomen las medidas necesarias para evitar un brote en estas localidades debido a la carencia de estructura y de personal para dar respuesta, panorama que podría conllevar a una emergencia crítica. •

La Jornada del campo

Suplemento informativo de La Jornada

16 de mayo de 2020
Número 152 • Año XII

COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra
Coordinador

Cecilia Navarro
lajornadadelcampo.edicion@gmail.com
Subcoordinadora

Enrique Pérez S.
Hernán García Crespo
Milton Gabriel Hernández García

CONSEJO EDITORIAL

Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo y Antonio Turrent.

Publicidad
jornadadelcampo@gmail.com

Diseño Hernán García Crespo

La Jornada del Campo, suplemento mensual de *La Jornada*, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV; avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, Ciudad de México. Tel: 5355-6702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título *La Jornada del Campo* número 04-2008-121817381700-107.

twitter.com/jornadadelcampo
facebook.com/La Jornada del Campo
issuu.com/la_jornada_del_campo

OPINIONES, COMENTARIOS Y DUDAS
jornadadelcampo@gmail.com



Fotografías: Joseph Sorrentino

CONEVAL

Propuestas para enfrentar los impactos económicos de la pandemia

Milton Gabriel Hernández García

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, cuyo objetivo es mejorar la toma de decisiones en la materia. Sus funciones principales son normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas, así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, “garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico”.

Según el Coneval, la crisis sanitaria generada por la COVID-19 y sus consecuencias económicas ponen en riesgo el desarrollo social y pueden afectar en mayor medida a los grupos vulnerables de nuestra sociedad. Esa es una de las conclusiones principales del documento que presentó el 11 de mayo, titulado *La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México*. Una de las dimensiones de la vulnerabilidad a la que hace referencia el documento tiene que ver con situaciones previamente identificadas y denunciadas por distintas voces, las cuales se han convertido en graves problemas

nacionales en las últimas cuatro décadas: “alta prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, precariedad laboral, problemas de acceso al agua y hacinamiento, así como múltiples brechas de acceso a los derechos sociales, como salud, alimentación, educación y vivienda”.

El documento señala que uno de los riesgos más preocupantes no es solo el decrecimiento de la economía, sino el aumento de la pobreza, que podría ser de entre 7.2 y 7.9 %. Esto significaría que entre 6.1 y 10.7 millones de personas podrían llegar en este año a una situación de “pobreza extrema por ingresos”, es decir, no contarían con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que precisan para satisfacer sus necesidades básicas (alimentarias y no alimentarias), no pudiendo tener acceso a una nutrición adecuada. La “pobreza laboral” podría llegar hasta 45.8% durante los dos primeros trimestres de 2020, por lo que casi la mitad de la población apenas podría adquirir una canasta alimentaria básica con su ingreso laboral. Además, la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable probablemente tenga afectaciones que la lleven a encontrarse en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Coneval considera que “es necesario desplegar los recursos e instrumentos disponibles para amortiguar el impacto, priorizando a los grupos que enfrentan mayor afectación y presentan



mayor vulnerabilidad”. Estos grupos son principalmente las mujeres, los trabajadores tanto del sector formal como del informal, las personas desempleadas y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME), los jornaleros agrícolas, así como niñas y niños cuyo aprendizaje se ve afectado por falta de acceso a las nuevas tecnologías.

Aun cuando el escenario económico es adverso, en el documento se señala que el gobierno de México está implementando 19 programas sociales prioritarios destinados a “apoyar a los sectores más afectados por la pandemia, y se identifican ocho programas sociales como relevantes para atender la pobreza”: 1) Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares; 2) Programa de Microcréditos para el Bienestar; 3) Becas para el Bienestar Benito Juárez; 4) Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior; 5) Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; 6) Programa de Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras; 7) Sembrando Vida y 8) Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF).

Coneval considera que la puesta en marcha de estos programas desde antes de la pandemia puede ser de suma importancia para atender la caída en el ingreso de la población en el corto plazo. Sin embargo, para que estos programas sean realmente efectivos, es necesario ampliar y fortalecer las medidas emergentes a partir de ellos, así como mejorar su capacidad operativa y asegurar que su focalización sea adecuada. Se plantea también que es prioritario

considerar medidas adicionales de atención a quienes pierdan su fuente de ingreso y a los sectores urbanos más expuestos.

Desde la perspectiva de Coneval es necesario incrementar la cobertura de estos programas. El escenario mínimo deseable es que aumentaran un 30%, con lo que “se apoyaría a 2,815,133 beneficiarios, requiriendo \$41,681.1 millones de pesos adicionales al presupuesto ejercido, por lo que el presupuesto total requerido sería de \$198,209.4 millones de pesos”. El otro escenario es que tuvieran una cobertura adicional de 8,873,924 de beneficiarios, para lo que se necesitaría un recurso público de \$137,288.1 millones de pesos adicionales al presupuesto ejercido, por lo que se requeriría un presupuesto de \$293,816.4 millones de pesos”.

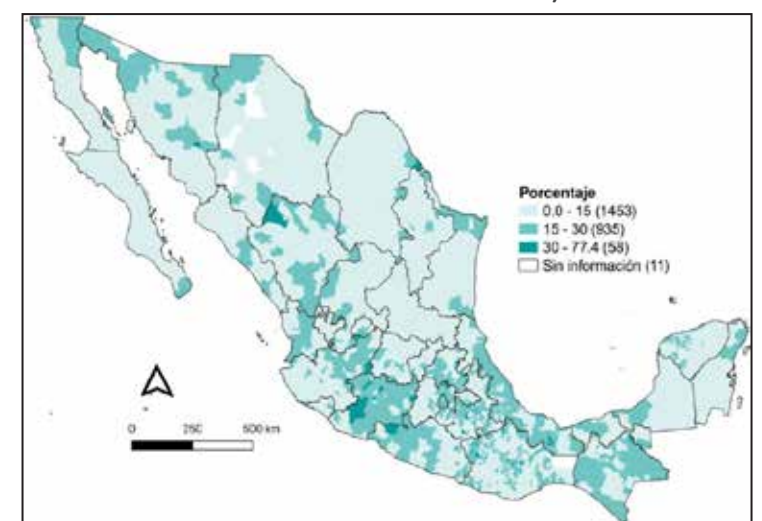
Coneval espera que las afectaciones económicas más intensas

se observen en las ciudades, por lo que los programas que se dirigen al sector urbano se tornan de mayor relevancia durante la emergencia sanitaria. Eso no significa que los impactos negativos en las zonas rurales no serán graves, pero en muchas de ellas existen diferentes niveles de autosuficiencia alimentaria a través de la agricultura campesina, la pesca, la caza y la recolección, lo que ayudará a amortiguar la severidad de la crisis. Sin embargo, es importante señalar que las economías rurales no están desvinculadas de las pequeñas y las grandes urbes, pues una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de las ciudades provienen del campo y están perdiendo su empleo en el trabajo doméstico, la industria de la construcción, el sector turístico o el ámbito informal. Por otro lado, las ciudades son las grandes consumidoras de los productos agropecuarios y lo que está cayendo a causa de la pérdida de los empleos urbanos es precisamente la capacidad de consumo.

En medio de esta crisis, los planteamientos de Coneval son un importante insumo para enfrentar la emergencia, sobre todo las medidas a corto, mediano y largo plazo que se proponen. Por ejemplo, garantizar que las familias mexicanas cuenten con el capital necesario a fin de amortiguar los efectos de la falta de ingresos, reactivar las economías locales, garantizar el derecho a la vivienda y el acceso al agua potable, contar con un padrón único de beneficiarios que permita diseñar estrategias articuladas para la población más vulnerable, consolidar la protección social estableciendo una pensión universal mínima de retiro e invalidez, consolidar el seguro de desempleo, la renta básica ciudadana o el piso mínimo solidario para la población empobrecida y finalmente, construir un sistema de protección social resiliente a eventos críticos como esta pandemia. •

Coneval espera que las afectaciones económicas más intensas se observen en las ciudades, por lo que los programas que se dirigen al sector urbano se tornan de mayor relevancia durante la emergencia sanitaria.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD. MÉXICO, 2015



Fuente: Estimación del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.

El COVID-19 y la chatarrización alimentaria de México



La pandemia del COVID-19 se juntó con la epidemia de obesidad y enfermedades asociadas a ella. Mallinatzin

Ubaldo Mendoza

La imposición del modelo neoliberal, de revolución verde y la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han causado dependencia alimentaria, migración forzada, violencia, hambre, pobreza y una epidemia de diabetes, obesidad y sobrepeso, derivada de la mala alimentación.

Ante la pandemia del COVID-19 este modelo de alimentación “chatarra” surte efectos desastrosos en las personas que padecen sobrepeso y las enfermedades asociadas a esta condición. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la comorbilidad asociada a los lamentables fallecimientos está mayoritariamente relacionada con problemas de hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, insuficiencia renal crónica, EPOC, enfermedades cardiovasculares, inmunosupre-

sión, asma y VIH o sida (gráfica 1).

En México, a diferencia de otros países, el promedio de edad de quienes mueren es de 59 años (gráfica 2). La causa de que las muertes en México se den a una más temprana edad que en otros países es, justamente, los problemas de salud que enfrenta la población mexicana, vinculados con una mala alimentación.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero del gobierno en el tema de la pandemia, ha mencionado en numerosas ocasiones que “cada año mueren 600 mil mexicanos y la mitad de esas muertes son causadas por la mala alimentación”, además de que la “responsabilidad de esa mala alimentación no es solo de las personas, sino también de una monstruosa y monumental sobreoferta de alimentos industrializados que tienen cuatro excesos: de sal, grasa, azúcar y calorías”¹.

La estrategia que implementó el gobierno de México para enfrentar la pandemia del COVID-19 ha sido blanco de ataques y críticas a las que se suma una enorme difusión de información falsa. Sin embargo, llama la atención que dichos cuestionamientos parecen tener un sentido más “político” y de cuidar los intereses creados durante años, que de salvaguardar la salud de la población.

A este tema se refiere Alejandro Calvillo, director de El poder del consumidor, en su reciente artículo “Los ataques a López-Gatell”², en el que explica que el subsecretario de salud ha sido blanco de ataques diversos, provenientes de la industria alimentaria, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo

Nacional Agropecuario (CNA), los “opinólogos” y recientemente de los ex secretarios y exsubsecretarios de salud... que nunca hicieron nada para proteger la salud de la población mexicana

del embate de las industrias de alimentos chatarra.

En días pasados el dr. José Narro Robles (exsecretario de Salud con Peña Nieto) se placeó por diversos medios de comunicación cuestionando la estrategia implementada por el gobierno de México para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID-19 y en particular acusó a López-Gatell de “mentir” a los mexicanos, ya que según él y otros exsecretarios de salud “no son creíbles los datos que presenta el gobierno federal sobre el avance de la pandemia de coronavirus”.

Es importante mencionar que en 2017, Narro Robles, intentó imponer como director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) a Pablo Kuri Morales (ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud). Ante este acto, diversas organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre los peligros que representaba esta intentona de “apoderar-

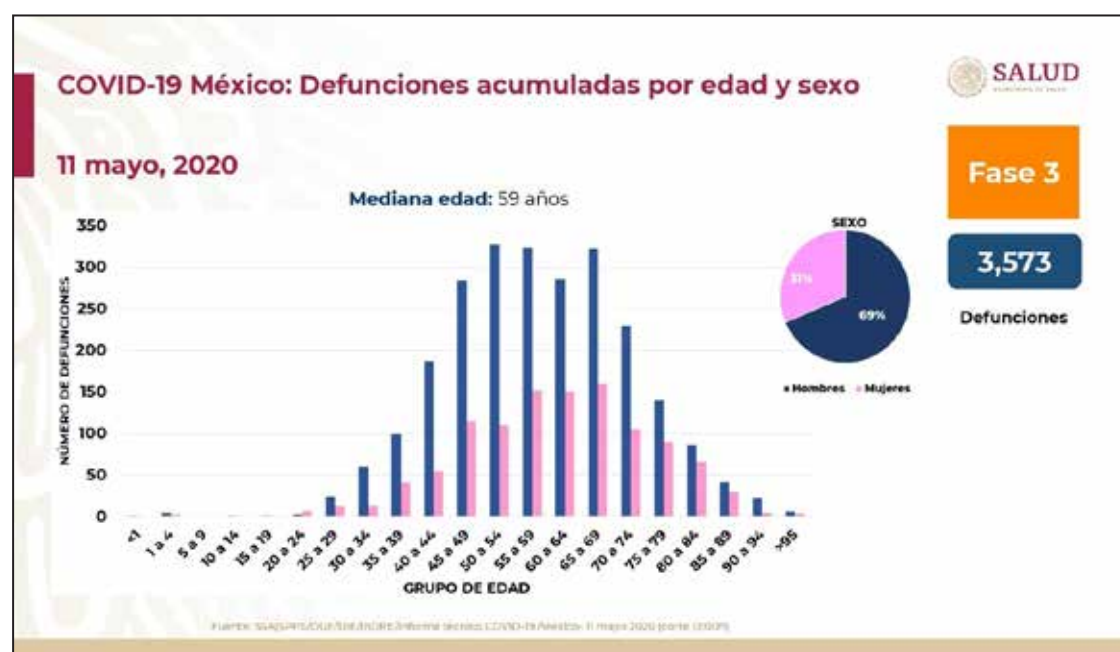
se” del INSP. Dicha presión causó efecto y la junta de gobierno presidida por Narro Robles (a pesar de su evidente molestia) y un comité de auscultación eligió al Dr. Juan Ángel Rivera Dommarco.

El INSP encabezado por el Dr. Rivera Dommarco y un grupo amplio de investigadoras e investigadores han sido parte fundamental, junto con muchas organizaciones de la sociedad civil, de la lucha a favor del etiquetado frontal de alimentos y bebidas ultrapocados.

Desafortunadamente, México apostó durante años por importar alimentos y malnutrir a la población. Y, ante esta pandemia, vemos con mayor visibilidad los estragos de esta “chatarrización alimentaria”. Por ello, es relevante que las voces de organizaciones campesinas, indígenas, de consumidores, ambientales, urbanas y miles de ciudadanos de a pie, sean escuchadas con más fuerza, para implementar un nuevo modelo agroalimentario y nutricional. •

Referencias

1. Información disponible en: <https://aristeguinoticias.com/0404/mexico/monstruosa-sobreoferta-de-alimentos-industrializados-incide-en-300000-mil-muertes-al-ano-en-mexico-lopez-gatell/>.
2. Información disponible en: www.sinembargo.mx/12-05-2020/3784697.



México apostó durante años por importar alimentos y malnutrir a la población. Y, ante esta pandemia, vemos con mayor visibilidad los estragos de esta “chatarrización alimentaria”.



Carmen. Joseph Sorrentino

Xochimilco: se desplomó la venta de hortalizas

Joseph Sorrentino

Margarita Vega Honorato señala una parcela de tierra llena de hileras de lechugas que sembrarían y pronto tendrían que arar. “Antes [del virus] vendíamos todo”, dijo. “Ahora no vendemos casi nada”. Camina una corta distancia y señala otra parcela de tierra. “Plantamos todo esto ayer. Veremos si podemos vender eso, pero, ¿quién sabe? Leonel Rufino Vega, su esposo, da un paso adelante y pregunta enojado: “¿Quién lo comprará? ¿Quién lo comprará ahora?”.

Margarita y Leonel son chinamperos, personas que cultivan la chinampa, la antigua tierra agrícola de San Gregorio Atlapulco, que sigue siendo increíblemente productiva. Hasta que el virus golpeó y el gobierno ordenó el cierre de negocios no esenciales, la pareja y su familia vendieron a restaurantes en Coyoacán. Con la mayoría de los restaurantes cerrados, sus ventas han desaparecido casi por completo. “Miles en el campo estamos sufriendo porque no podemos vender nuestros productos”, dijo Minerva González, su nuera. “La agricultura es la base de todo en México”.

El mercado de San Gregorio Atlapulco, como todos los mercados en pueblos cercanos, todavía está abierto y aún está lleno. Los puestos están repletos de productos que se cosecharon recientemente en la chinampa. “Este pueblo está dedicado a esto, a vender verduras”, dijo Carmen Cruz Sánchez, una chinampera. “Así es como vivimos. ¿Quién sabe cuánto tiempo sobreviviremos? Ella dijo que está vendiendo aproximadamente la mitad de lo que solía. Mi familia está sobreviviendo, comprando solo lo básico”, continuó, “frijoles, arroz, huevos, rara vez carne”.

A pocos metros de distancia, su amiga Juana Galicia Martínez se sienta en su puesto. Galicia Martínez sabe lo peligroso que es el virus, pero, como su amiga, no usa una máscara; los encuentran incómodos. Y también como su amiga, ella está en su puesto todos los días. “Necesitamos vender porque si no lo hacemos, no comemos”, comentó. “Gano unos 300 pesos por día. Esto es suficiente para que comamos”. Ahora que México está en la Fase 3, existe la posibilidad de que el gobierno tome medidas más estrictas; quizás los mercados estarán

cerrados o más regulados. “Si el gobierno nos cierra, somos campesinos y les preguntaré,” Cómo nos ayudarán?”, preguntó Cruz Sánchez.

A una cuadra de distancia, Armando David Nieto Rodríguez considera lo que sucedería si tuviera que cerrar su puesto de verduras. “Creo que podría sobrevivir”, dijo, “pero sobrevivir es muy diferente de vivir, ¿no?”.

Con los restaurantes cerrados, González y Coat Rufino, su esposo, comenzaron a vender directamente a la gente de la ciudad. González diseñó un cartel publicitario de sus productos y lo publicó en Facebook. “Estamos utilizando las redes sociales”, dijo Rufino. “La gente nos envía una lista y cuando estamos frente a su casa, les enviamos un mensaje de texto”. Cuando se le preguntó si vender comida de esta manera era un riesgo, Rufino dijo: “Tomamos precauciones: guantes, máscaras. Simplemente entregamos la comida, pagan y eso es todo”.

González y Rufino pasan un par de días cosechando comida en la chinampa y luego se levantan a las 6 de la mañana los lunes para prepararse para un día en la ciudad. Abarrotan el asiento trasero y la cajuela de su pequeño automóvil con productos y otros artículos. “A veces compramos cosas como tortillas, dulces cristalizados, champiñones ... cosas que no cultivamos”, mencionó Rufino. En un viaje reciente, se detuvieron para comprar tlacoyos en un puesto. En un buen día, es una hora en coche a Coyoacán, donde están la mayoría de sus clientes. Se estacionan en la calle, González organiza las órdenes y su esposo envía mensajes de texto. Pronto, las personas, la mayoría con máscaras, comienzan a aparecer.

Era la primera vez que Elisa Muñoz compraba a la pareja y estaba contenta. “Es para ayudarlos”, dijo, y agregó: “La comida es más segura y es más sencilla porque nos la llevan”. Raquel Louctalot también estaba contenta con los artículos que compró. “Esto es mucho más barato que en las tiendas, donde podría costar el doble”, aseguró. “Son de la chinampa y quiero apoyarlos”.

Rufino y González se están adaptando a una nueva forma de hacer negocios con nuevos clientes. “La gente en Coyoacán quiere cosas diferentes a las personas en San Gregorio”, dijo González. “Estamos plantando bok choy, más col rizada, brócoli morado”. La pareja le da a cada cliente un producto gratis y les dice: “Es un regalito”, mientras lo colocan en la bolsa.

Juan y Erick Serralde, dos hermanos, son chinamperos cuya familia ha plantado en la chinampa por cuatro generaciones. Normalmente se venden en los mercados de la ciudad, pero han notado cambios desde que entró en vigor el Quédate en Casa. “Estamos ganando menos dinero”, dijo Juan. “Se debe a dos cosas: hay menos personas comprando y tienen menos dinero para gastar porque no están trabajando”. Así que también comenzaron a entregar productos directamente a los clientes en la ciudad, principalmente en La Condesa y en la Colonia San Rafael en Reforma. “Ganamos algo de dinero y ayu-

da a las personas que están en cuarentena”, dijo Juan.

Los chinamperos siempre han enfrentado largas jornadas de trabajo duro, por lo que un día de nueve o diez horas, que es típico cuando se entrega comida a los habitantes de la ciudad, no es inusual para ellos. Pero ahora si bien no es más difícil, el trabajo ciertamente conlleva más riesgos y, aunque están tomando precauciones, simplemente salir en estos días puede poner a una persona en riesgo (*). Lo que están haciendo es más como un servicio, porque, ciertamente, no se están haciendo ricos entregando sus alimentos. “Ganamos alrededor de \$1,500 pesos, por lo que son esencialmente tres o cuatro días de trabajo”, dijo Rufino. “¿Vale la pena? Creo que sí. Primero, estamos llevando comida a las personas que la necesitan. En segundo lugar, perdimos un área que habíamos plantado, de lechuga roja. Tuvimos que regalarlo porque no podíamos venderlo. Por lo tanto, vale la pena para que no lo perdamos todo”.

Cualquier persona interesada en comprar productos puede comunicarse con González y Rufino al: 55-2949-3115 y con Juan y Erick Serralde al: 55-6502-3296. •

Nota

* Recientemente, se supo que varios chinamperos que venden sus verduras en el Centro de Abastos han dado positivo por COVID 19. Hoy la Central de Abastos está considerada una de las zonas más críticas de contagios en la Ciudad de México.



Margarita. Joseph Sorrentino



Nuestro principal alimento. Valentina Pesarín

Comercializadoras de maíz hacen su agosto durante la pandemia

Valentina Pesarín

Diversas organizaciones de productores de masa y tortillas aseguran que desde inicios de marzo los precios del maíz que las tortillerías compran se han incrementado entre 300 y 800 pesos por tonelada. Hasta ahora, el precio de la tortilla no ha aumentado significativamente, sin embargo, preocupa saber por cuánto tiempo más los productores podrán absorber el encarecimiento de su principal insumo.

Las seis mayores comercializadoras de granos que operan en el país justifican el aumento del precio por la subida del dólar y las fluctuaciones en el precio del maíz en la bolsa de Chicago (especializada en la cotización de futuros agrícolas y otras materias primas). Incluso si la FAO define la volatilidad de los precios agrícolas como nueva normalidad, es justo preocuparse y ocuparse en impedir que esta época de COVID-19 coincida con una nueva crisis de la tortilla.

A finales de marzo, el presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, Sergio Jarquín Muñoz, preocupado por el destino de las numerosas tortillerías que representa, hizo un llamado al gobierno federal para que interviniera y regularizara el mercado del maíz.

Para averiguar si, en efecto, los precios del maíz en el país aumentaron durante marzo y

abril, es suficiente consultar los datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía. Como se reporta en la gráfica, la tonelada se encareció entre 250 y 700 pesos en centrales de abasto de las ciudades más representativas del país. Si bien es un indicador útil, es importante notar que éstos no son los precios a los cuales compran los tortilleros, quienes suelen comprar maíz a distribuidores locales, a su vez abastecidos por las grandes comercializadoras.

Hay evidencia para sugerir que el gobierno federal, a través de la Profeco, instruyó una verificación del aumento del precio al cual Maseca compra su maíz. Dicha empresa, además de ser la mayor vendedora global de tortillas y de harina de maíz, es propietaria de GIMSA, una de las seis mayores comercializadoras en México. Maseca aseguró a la Profeco que sus precios de compra no han aumentado durante 2020 y, en una reunión el 7 de abril con el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso en mantener los precios de la harina estables. Sin embargo, el error de las autoridades es no percibir la asimetría entre el poder adquisitivo de Maseca y el de los pequeños tortilleros, que le permite comprar a precios mucho más bajos. Además, es importante notar que, por ser a la vez comercializado-

ra y procesadora, ahora Maseca está procesando maíz adquirido a precios menores en la cosecha del año pasado.

A pesar de lo anterior, desde el 28 de marzo la Profeco ha insistido en que no hay razón para que las tortillerías incrementen sus precios, visto que el abasto de maíz blanco está garantizado. La Procuraduría encomienda a los productores de tortillas a solidarizarse con los consumidores, mientras amenaza con multar a quienes aumenten los precios. Esto refleja un análisis escueto, según el cual la escasez sería la

Es fundamental dar a luz a un plan alimentario de emergencia que evite una nueva crisis de la tortilla y procure resiliencia a lo largo de la cadena, fortaleciendo la conexión entre el Programa de Apoyo a la Soberanía Alimentaria de Maíz y los pequeños productores de masa y tortilla.

única razón para justificar el aumento del precio. En realidad, como diversas organizaciones de productores de masa y tortilla lo han señalado, el problema es mucho más complejo y grave: tiene sus raíces en dinámicas de acumulación y especulación de las grandes comercializadoras.

Es fundamental notar en qué punto de la estructura de la cadena maíz-tortilla se eleva el costo y a partir del cual repercute en los eslabones siguientes. La mayor parte del maíz blanco del país es adquirido por seis grandes comercializadoras. El oligopolio que han establecido les permite determinar los precios y aumentar sus ganancias en medio de una crisis de salud pública, dando origen potencialmente a una crisis alimentaria.

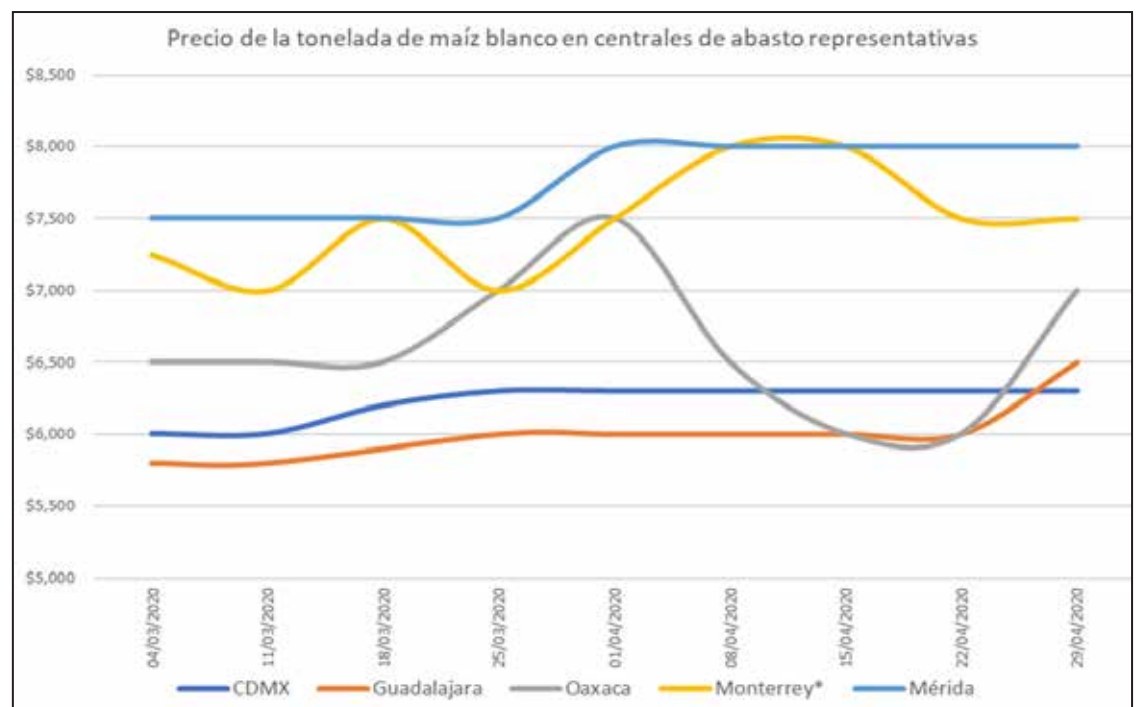
Todo parece indicar —y la historia de la crisis de la tortilla de 2007 lo hace evidente— que las comercializadoras son quienes tienen el poder de dictar las reglas del juego y de conservar un as bajo la manga que les permita ganar la partida holgadamente.

En lugar de negar el alza del precio, el gobierno haría bien en reunirse con las organizaciones de base integradas por los tortilleros, así como con investigadores y especialistas con una óptima visión sistémica e histórica de la cadena. Es fundamental dar a luz a un plan alimentario de emergencia

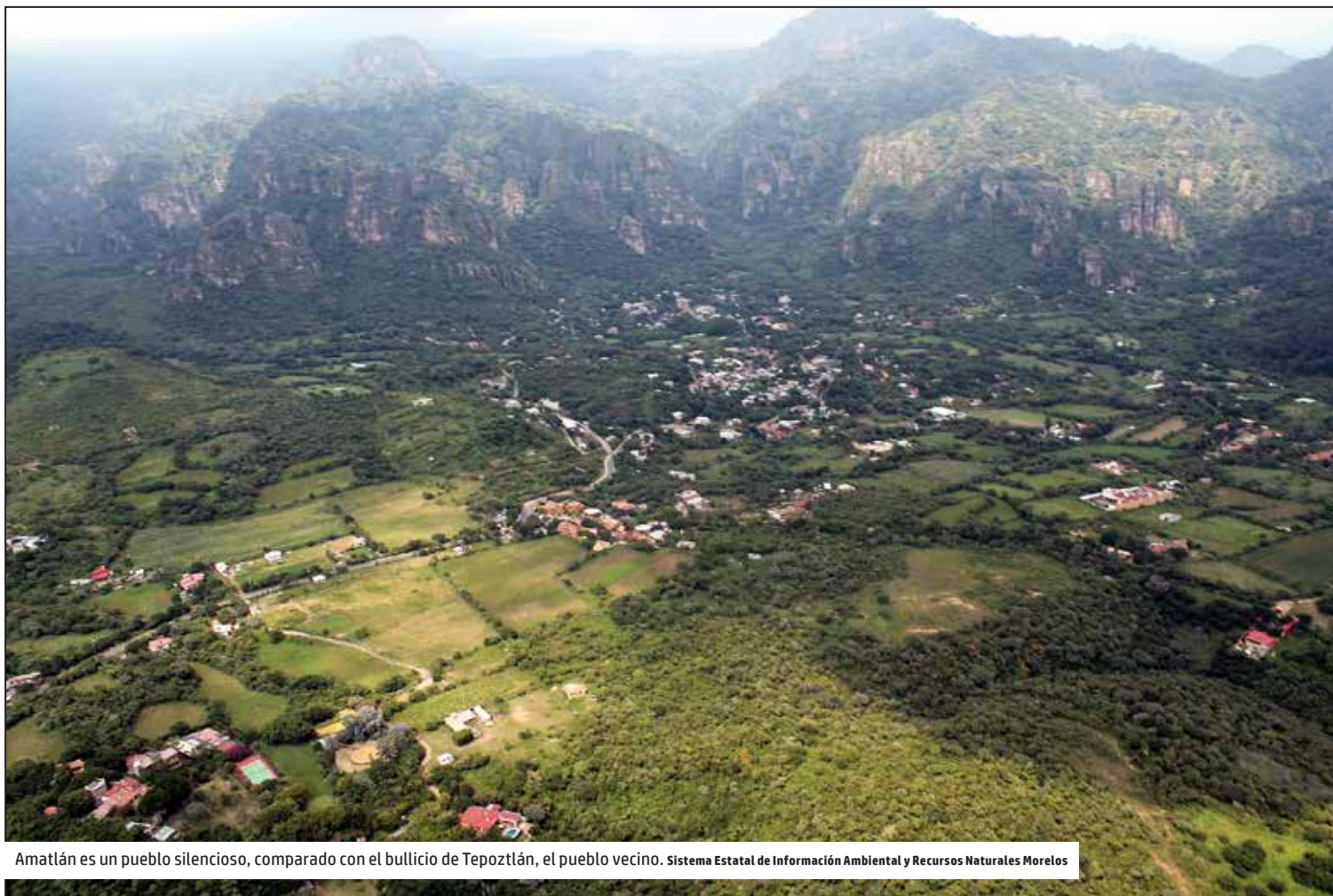
que evite una nueva crisis de la tortilla y procure resiliencia a lo largo de la cadena, fortaleciendo la conexión entre el Programa de Apoyo a la Soberanía Alimentaria de Maíz y los pequeños productores de masa y tortilla.

Para evitar que las comercializadoras sigan utilizando una crisis de salud pública para acaparar maíz, incrementar sus reservas y provocar un aumento artificial de los precios, el gobierno tiene que ser más maquiavélico que ellas. Proteger a sus consumidores significa regular el mercado del maíz y evitar que las comercializadoras banqueteen con el hambre. •

Las seis mayores comercializadoras de granos que operan en el país justifican el aumento del precio por la subida del dólar y las fluctuaciones en el precio del maíz en la bolsa de Chicago.



Fuente: Elaboración propia con datos en línea del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. * Precio promedio de dos centrales de abasto.



Amatlán es un pueblo silencioso, comparado con el bullicio de Tepoztlán, el pueblo vecino. Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales Morelos

MORELOS

Entre las estrategias campesinas y el histórico abandono al campo

Alejandra Olvera Carbajal Centro INAH Morelos

El siguiente texto es parte del trabajo realizado por el Colectivo de Estudios sobre el Patrimonio Biocultural de Morelos y regiones colindantes. La información corresponde al municipio de Tepoztlán, específicamente a Amatlán de Quetzalcóatl, comunidad de tradición cultural nahua, enmarcada por montañas sagradas para los amatlecos desde la época prehispánica.

Amatlán es un pueblo silencioso, comparado con el bullicio de Tepoztlán, en donde la mayoría de la gente se dedica a la agricultura y recientemente al turismo, pues mucha gente busca la tranquilidad y belleza de sus montañas. La cotidianidad de este poblado se rompió el 8 de abril, cuando en una asamblea comunitaria se decidió que al día siguiente se colocaría un cerco sanitario en la entrada del poblado ¿La razón? Tratar de frenar los contagios de COVID-19 que en esos días comenzaban a incrementarse en Cuernavaca, la capital del estado y también en

la CDMX. A la fecha en la que se escribió este artículo, el cerco sanitario a la entrada de Amatlán continúa. Cabe mencionar que en las entradas de la cabecera municipal también se mantienen bloqueos que evitan el ingreso de gente que no acredite vivir en dicho municipio.

El silencio en las calles de Amatlán a veces se rompe por un auto que circula con una bocina amarrada al toldo y que transmite mensajes a la población invitándola a quedarse en casa y lavarse las manos con agua y jabón. La información sobre la pandemia que llega a esta comunidad rural generalmente es la que se escucha en programas de radio y televisión, además de lo que se puede leer en las redes sociales como Facebook y lo que se cuenta de boca en boca. Las personas en Amatlán están alertas; sin embargo, el “quedarse en casa” es difícil para la gente del campo, pues el trabajo en sus tierras no se detiene.

Don Isidro, campesino amatleco, compartió algunas de las problemáticas a las que se en-

frentan él y sus compañeros que se dedican a la siembra del maíz criollo: “nosotros no tenemos así como una cuarentena restringida, o sea, que estemos en cuarentena sin poder salir. Nosotros sí podemos salir, podemos preparar la tierra, pero si esto se prolonga hasta mayo y junio, entonces sí nos afectaría porque no sembraríamos”.

La principal preocupación de los campesinos en Amatlán está ligada a la posible falta de fertilizantes, pues como narra Don Isidro, los programas de apoyo al campo facilitan el 50% de estas sustancias para la siembra y ante la emergencia nacional que ha causado el COVID-19, temen que el fertilizante no se les entregue a tiempo: “lo que noso-

tros pensamos ahorita que está la pandemia y nos tiene preocupados, es que ya se acerca el mes de mayo, que es cuando nosotros empezamos a preparar la tierra para la siembra. Entonces nosotros como campesinos estamos pensando qué va a pasar a futuro, que a lo mejor en mayo y junio no nos proporcionen el fertilizante, porque tal vez tengan cerradas las bodegas de químicos o los abonos orgánicos. Ahorita sí nos está preocupando. Cuando a nosotros nos dan el fertilizante, debemos tenerlo ya para principios de junio, porque nosotros sembramos del 9 de junio al 19 de junio o al 20 cuando ya es muy tarde. Nosotros ya deberíamos tener el fertilizante para que el maíz tenga la resistencia adecuada, porque si nos dan el fertilizante hasta julio, pues ya no nos serviría para nada. Los primeros 40 días del maíz son los más apropiados para el fertilizante, porque si no se empieza a hacer delgada la planta, empieza a perder nutrientes y ya no nos serviría mucho. Nosotros por eso metemos la documentación en este abril y mayo para que a principios de junio nos den el abono y a las primeras 4-5 hojas de haber germinado el maíz, es cuando hay

que aplicar el fertilizante, para que tenga buena raíz, buena resistencia y de buena cosecha, porque si nos lo mandan muy tarde, pues ya no nos sirve mucho el fertilizante”.

La ausencia o el retraso de este apoyo, podría tener graves consecuencias en la producción del maíz que principalmente es para el autoabasto de las familias. Así lo narra nuestro interlocutor: “de hecho se sembraría menos, porque hasta la fecha no nos han bajado los fertilizantes, no nos han bajado los precios, entonces si no tenemos el apoyo del gobierno pues tendremos que sembrar, pero menos. Nos está costando mucho porque nosotros dependemos de eso, somos campesinos. La gente no conoce la magnitud del problema, pero nosotros sí y nos está preocupando”.

Las medidas de protección que se han establecido en Amatlán y en otras comunidades rurales, sin duda han ayudado a que no se dispare el número de contagios, sin embargo, en el campo aún se desconoce cual podría ser el balance total de los daños causados por Covid-19, pues es ahí en donde principalmente se vive con desigualdades históricas, agravadas por la falta de servicios médicos y/o la carencia de agua potable. A pesar de eso, las comunidades cuentan con una herramienta que casi no se conoce en las ciudades: la comunalidad o el apoyo colectivo y recíproco; además de tener espacios productivos que son parte de la estrategia de vida campesina, como la milpa y los huertos. El gobierno de México ha anunciado apoyos al campo para los productores, pero estos apoyos deben llegar a tiempo, pues la siembra de temporal está condicionada a la presencia de lluvia, que ya comienza a llegar en muchos lugares. Cierro mi nota con esto que comparte Don Isidro y que da cuenta del sentimiento de abandono con el que han vivido los campesinos de todo México: “Yo he estado escuchando las noticias de que están apoyando a pequeñas, medianas y grandes industrias con algún recurso económico, algo que les dan solución el gobierno, pero directamente del campo no están hablando nada con esto de la pandemia, al campo no le están inyectando ninguna información, no le están dando una esperanza al campesino”.

La principal preocupación de los campesinos en Amatlán está ligada a la posible falta de fertilizantes: los programas de apoyo al campo facilitan el 50% de estas sustancias para la siembra y ante la emergencia nacional que ha causado el COVID-19, temen que el fertilizante no se les entregue a tiempo.

LA PRODUCCIÓN DE VINOS EN MEDIO DE LA PANDEMIA, HISTORIAS QUE NUNCA SE CUENTAN

Los diversos artículos que abordan la problemática de la vitivinicultura y de las zonas vitivinícolas en el contexto del COVID-19 se refieren a los nuevos países que se insertan en el mercado globalizado del vino, de sur a norte, Argentina, México, Estados Unidos y Canadá, y a España, país del viejo mundo del vino.

Entre los aspectos abordados en los artículos se señala la diversidad de formas de acceder a la mano de obra necesaria. El cultivo y la cosecha de las uvas es un trabajo temporal que requiere una cantidad fluctuante de mano de obra a lo largo del año. Ello ha llevado a la utilización de diversos mecanismos: la intermediación a través de contratistas o cuadrilleros, programas de trabajo temporal y visas para trabajadores agrícolas para lograr tener una mano de obra disponible y necesaria en cier-

tos periodos de trabajo. Además, se ha recurrido a trabajadores de diversos orígenes nacionales y con derechos y condiciones de trabajo diferenciadas para crear una segmentación del mercado de trabajo que permite mantener a la baja las condiciones de trabajo y salarios de los más vulnerables de esa actividad; los jornaleros, vendimiadores o cosechadores, según el país al que hagamos referencia.

Esas zonas vitivinícolas están enfrentando diversos retos en el contexto del COVID-19. Unas han cerrado sus operaciones de manera temporal, otras han tenido que enfrentar la pandemia en momentos críticos tales como la cosecha, otras se han volcado a la venta en línea, pero independientemente de ello, los trabajadores, principalmente migrantes, internos o internacionales, documentados e indocumentados, son los que están en la situación de mayor vulnerabilidad; sus ingresos son

necesarios para sobrevivir y su seguridad no está garantizada en ese contexto. Por otro lado, su trabajo es vital en esas actividades: o levantan las cosechas o se pierden las inversiones y el trabajo de un año. La baja remuneración a su trabajo se ha basado en el argumento de que realizan un trabajo no calificado. No obstante, como señalan los autores de los artículos, en el contexto de la pandemia y el cierre de las fronteras y las restricciones a la movilidad, ahora se argumenta que es importante que lleguen esos trabajadores ya que son trabajadores capacitados y necesarios en las actividades nombradas como esenciales.

La pandemia nos debe permitir repensar y reconocer la labor fundamental que realizan estos trabajadores para garantizarles una migración documentada y condiciones de trabajo decente. •

La coedición es de **Martha Judith Sánchez Gómez**

Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

SONORA

La uva de mesa: todos quieren seguir con la cosecha pese a riesgos de salud

Kim Sánchez y Adriana Saldaña Universidad Autónoma del Estado de Morelos

La producción de uva de mesa en México se concentra en Sonora, en los municipios de San Miguel Horcasitas, Hermosillo y Caborca. Durante tres periodos en el año (diciembre, febrero y mayo), empresarios demandan a miles de trabajadores para llevar a cabo distintas tareas que permitan tener un producto con calidad de exportación, destacando la cosecha en mayo y junio. Estos trabajadores son temporales y suelen llegar del sur, de Puebla, Chiapas y otros estados. Durante la epidemia del COVID-19 estos jornaleros no pueden permanecer en sus casas, como lo han dispuesto las autoridades de la Secretaría de Salud (SSA), pues los ingresos obtenidos en la uva de mesa son fundamentales en la economía de sus hogares, debido a que son originarios de regiones donde escasea el empleo y pertenecen a un sector estratégico, que es la producción de alimentos.

Una parte de los jornaleros que llegan a Sonora son enganchados en sus lugares de origen, pero otra, arriba directamente buscando “el jale”. Los primeros habitan, durante el periodo laboral, en campamentos controlados por las empresas, en donde es factible que exista mejor infraestructura y condiciones de vigilancia sanitaria durante la epidemia; los segundos suelen concentrarse en Estación Pesqueira, localidad que se convierte en epicentro de la región agrícola de Hermosillo, con una población flotante estimada de entre 20 y 25 mil personas. En ésta rentan en “cuarterías”, donde la carencia de servicios puede generar un ambiente de gran riesgo para todos, porque la localidad misma tiene rezago social.

Estación Pesqueira tiene un grado de marginación alto, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010. Para ese año, el 14.72% de las viviendas tenía piso de tierra, el 20.95% no tenía drenaje, el

2.89% no contaba con agua entubada y el 5.94 por ciento no tenía sanitario.

El pasado 30 de marzo autoridades estatales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y SSA de Sonora declararon a la prensa local que se habían puesto de acuerdo con empresarios agrícolas para prevenir y evitar que el coronavirus llegara de la mano de los jornaleros migrantes que trabajan en sus viñedos. El escenario es crítico: en mayo y junio habrá una afluencia masiva de trabajadores que arriban desde decenas de estados de la república a cosechar la apreciada uva de mesa.

Nadie quiere que la epidemia se extienda, pero tampoco que se suspenda la cosecha, por más que el producto no es un bien alimentario básico para las y los mexicanos, pues se destina a mercados internacionales, sobre todo a Estados Unidos. Los

empresarios no desean perder su inversión, ni los trabajadores su sueldo. Por lo mismo, preocupan los comunicados de las autoridades estatales, pues aseguraron que los empresarios realizarían una revisión y valoración de la salud de sus trabajadores desde los lugares de origen. Sin embargo, como se ha señalado, no todos los cosechadores temporales son contratados desde origen, otros llegan “por su cuenta” a la entidad para buscar trabajo. Estos últimos no serían tomados en cuenta en las acciones señaladas; además se hospedan temporalmente en una localidad sin suficientes recursos para enfrentar la pandemia, tanto para los habitantes como para los recién llegados. Al terminar la cosecha estos jornaleros – de los campamentos y las cuarterías – regresan a sus pueblos, situación que puede multiplicar exponencialmente los frentes de contagio.

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) de Conacyt ha colaborado con autoridades para mitigar el COVID-19, a través de diversas estrategias en distintas regiones sonorenses. Éste ha señalado acertadamente –refiriéndose a las comunidades indígenas marginadas de la entidad– que la precariedad de su economía y carencia de servicios básicos puede llevar a que con esta pandemia ocurra una gran tragedia. Un escenario análogo puede ocurrir si en Pesqueira no se toman medidas básicas proactivas para enfrentarla.

Vale reiterar el llamado del CIAD a las instancias de gobierno y sociedad civil, y hacerlo extenso para Estación Pesqueira, que recibe miles de trabajadores entre mayo y junio:

- Garantizar el abastecimiento de agua potable y los insumos sanitarios (sin costo).
- Garantizar el abastecimiento de alimentos de buena calidad y de las medicinas necesarias.
- Impulsar una estrategia de comunicación asertiva sobre el riesgo frente al COVID-19.

En el contexto de la epidemia, la atención de los jornaleros agrícolas que llegan contratados o “por su cuenta” debe incluir la vinculación entre empresarios agrícolas, autoridades sanitarias, contratistas y cuadrilleros que se comprometan a apoyar en las medidas de difusión de información y en proporcionar elementos básicos para el aseo en lugares de trabajo y viviendas –cuarterías y campamentos–, así como atender a los trabajadores (casos sospechosos y confirmados), sin afectar sus propios ingresos. •



Proyecto Enclaves, Estación Pesqueira, 2014. Fotografía: Alex Castillo



Así lucen los viñedos en estos días.

BAJA CALIFORNIA

Viñedos vacíos, los jornaleros haciendo de todo

Lino Meraz Ruiz y Adrián García Fernández
Universidad Autónoma de Baja California

El impacto del COVID-19 en México en el giro hotelero y turístico suma pérdidas por 243,537 millones de pesos y conlleva el cierre de micro y pequeñas empresas (Saldaña, 2020). La zona turística vitivinícola de Baja California, en la zona noroeste de México, donde se produce alrededor del 90% de la producción de vino nacional de calidad (García et al., 2018), se ha visto fuertemente impactada; la mayoría de las empresas vitivinícolas han decidido cerrar sus puertas, buscando estrategias para paliar la situación, entre ellas las adoptadas por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, que sigue vendiendo productos con servicio de entrega a domicilio (Anónimo, 2020).

La población de escasos recursos siempre resulta más afectada ante las pandemias, puesto que necesita laborar para su supervivencia. Un ejemplo de ello son los grupos de jornaleros agrícolas migrantes de los campos de cultivo de la zona norte de México, población que ha crecido en años recientes de manera exponencial (alrededor de 5.9 millones de personas); sin embargo, tal como lo dice Velasco et al. (2020), debido a su vulnerabilidad tienen rezagos para el acceso al sistema de salud. Además, viven en hacinamiento en vivien-

das tipo campamento y son trasladados en autobuses o camiones de redilas a los campos agrícolas (donde pueden ir hasta 50 personas), por lo que están expuestos a contagios, y son un factor de riesgo en la propagación del virus.

En una entrevista realizada el 2 de mayo de este año con un jornalero a quien llamaremos Juan, de 67 años de edad, originario de Oaxaca y radicado en Ensenada, Baja California, quien se ha dedicado al trabajo agrícola por más de 40 años y es intermediario entre los empleados indirectos y la empresa en la temporada de la pizca de la uva, relata varias situaciones que están viviendo los trabajadores del campo de la vid como resultado del cierre de muchas empresas vitivinícolas del Valle de Guadalupe: “[...] el COVID ha afectado a todos sus empleados, muchos ya no tienen trabajo y no saben qué hacer... están haciendo trabajo en otras cosas como mecánica, limpiando terrenos, tirando basura [...]”. Esto agrava la situación para estas personas ya que no pueden parar de trabajar o, como lo dice el entrevistado: “[...] si no trabajan no comen, entonces si nos cierran las empresas cómo vamos a conseguir trabajo, tenemos que comer y dar de comer a nuestras familias, no podemos detenernos [...]”. Un dato interesante fue

que el entrevistado no quiso decir el salario que perciben en los campos de cultivo de la uva, pero otros estudios señalan que es bajo y se constata en las precarias condiciones en que viven.

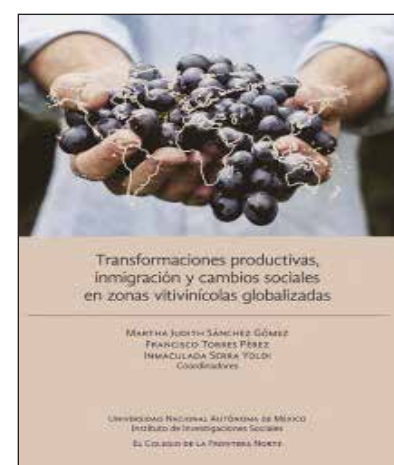
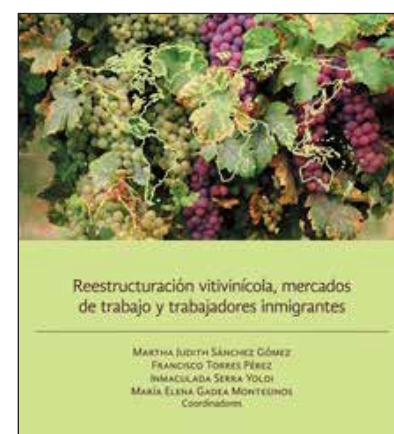
El entrevistado también afirmó que: “[...] las empresas cierran porque no hay gente, los turistas ya no vienen, el vino se vende solo a algunos clientes... ha bajado mucho la venta de vino en el Valle de Guadalupe [...]”. Además, infirió que “[...] a los empresarios no les afecta cerrar sus negocios porque ellos tienen dinero para comer, pero nosotros los que laboramos en el campo la vamos pasando día tras día, todos comemos [...]”. El entrevistado no está informado sobre las medidas que ha tomado el gobierno para ayudar a los jornaleros agrícolas y asegura que “[...] la situación va a mejorar en dos o tres meses, la gente extraña venir a tomar vino al valle y muchos esperan el verano para venir de vacaciones [...]” “[...] porque el vino siempre se vende, a todos les gusta el vino, las fiestas y los atractivos que hay aquí en Valle de Guadalupe [...]”.

En términos generales, esta evaluación rápida ha proporcionado una visión general de la crisis que ha ocasionado la pandemia COVID-19 en todos los sectores. Particularmente ha afectado a la economía de muchas organizaciones, ha afectado a familias y grupos sociales con rasgos de vulnerabilidad, como los jornaleros. Por esta razón existe una necesidad urgente de no regresar a los negocios habituales y los modos de vida cuando termine la crisis, más bien será una oportunidad de reconsiderar una transformación de todos los sistemas económicos globales, en especial el sector turístico. •

Referencias

- Anónimo. 2020. Vinícolas cierran salas de degustación ante coronavirus. Hiptex.com. Disponible en <http://hiptex.com.mx/noticias/15110/vincolas-cierran-salas-de-degustacion-ante-coronavirus>.
- García, A., Meraz, L., y Díaz, E. R. 2018. Wine tourism and wine marketing in family-owned micro wineries in Guadalupe Valley, Mexico. *Rosa Dos Ventos*, 10 (4), 690-711.
- Gobierno de México. 2020. Comunicado Técnico Diario COVID-19 México. Disponible en www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/550246/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.05.03.pdf.
- Saldaña, I. 2020. Cierra 65% de comercios en México por Covid-19; en riesgo miles de empleos, advierten. *Eluniversal.com.mx*. Disponible en www.eluniversal.com.mx/cartera/coronavirus-cierra-65-de-comercios-en-mexico-por-covid-19-en-riesgo-miles-de-empleos.
- Velasco, L., Coubès, M. L., y Contreras, O. F. 2020. Los jornaleros agrícolas migrantes (Documentos de contingencia. Poblaciones vulnerables ante COVID-19). El Colegio de la Frontera Norte.

AGENDA RURAL



La zona turística vitivinícola de Baja California, en la zona noroeste de México, donde se produce alrededor del 90% de la producción de vino nacional de calidad, se ha visto fuertemente impactada; la mayoría de las empresas del ramo han decidido cerrar sus puertas.



Condado de Napa. Martha J. Sánchez

CALIFORNIA

La venta de vinos crece, la precariedad laboral permanece

Martha Judith Sánchez Gómez Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM **Hugo Santos Gómez** Universidad de California-Santa Bárbara

California produce el 90% de los vinos de Estados Unidos en 45 de los 58 condados de ese estado. Cuenta con una superficie total de 925,000 acres de viñedos y 637,000 acres de uvas para vino (CDFA¹, 2018).

Los condados de Napa y Sonoma en la costa norte de California constituyen ejemplos de una vitivinicultura ya consolidada, es decir, con prestigio nacional e internacional tanto por la calidad de las uvas que cultivan como por los vinos que producen; en ambos casos la vitivinicultura representa la columna vertebral de sus economías regionales. De

hecho, estos dos condados concentran cerca de la cuarta parte del valor de los vinos producidos en el estado. Estas zonas no sólo obtienen grandes ganancias por sus vinos sino también por el turismo asociado al vino. En 2005 el condado de Napa contó con alrededor de 4.7 millones de turistas. McLean² (2013), señala que los turistas gastaron en la zona 265 millones de dólares en restaurantes y similares, 184 millones en vino, 38 millones en catas y 63 millones en compras al por menor. Sin duda estos condados representan un modelo global tanto en la producción, elaboración y comercialización del vino

como en la actividad enoturística asociada.

Los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara —ubicados en la costa central californiana— son casos en los que la vitivinicultura podría considerarse como una actividad económica relativamente nueva que se desarrolla en la trayectoria de Napa y Sonoma y su vocación por la producción de vinos de alto valor. Sin embargo, tanto en San Luis Obispo como en Santa Bárbara, la viticultura representa una fracción de unas economías agrícolas más diversificadas, entre un tercio y una décima parte respectivamente, en tanto que en Napa y Sonoma representa prácticamente la totalidad y las dos terceras partes, respectivamente. Asimismo, difiere la importancia que la actividad enoturística tiene en las dos zonas. En el caso de los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara esa actividad se ha impulsado al amparo del turismo de playa y aún dista mucho del prestigio y de las ganancias logradas en el condado de Napa.

La vitivinicultura californiana en su conjunto enfrenta un escenario complejo impuesto por la pandemia y las medidas de mitigación. Sin embargo, en un vuelco inesperado de expectativas, las bebidas alcohólicas están presentando un alza importante en las ventas en plena contingencia. El vino ha incrementado sus ventas en un 14% con respecto al mismo periodo del año pasado. Bien podría decirse que la producción vitivinícola continúa hasta ahora

como si no hubiera emergencia sanitaria. Esto no significa que las labores del campo se realicen en forma distinta a las condiciones de precariedad tradicionales, por el contrario, sus trabajadores enfrentan nuevos retos.

En ambas zonas, la mano de obra que se encarga de las labores del campo está constituida principalmente por trabajadores documentados e indocumentados de origen mexicano. Es posible aventurar que el número de trabajadores agrícolas (temporales y fijos) en los cuatro condados podría oscilar entre las 17 mil jornaleros en las temporadas de podas y alrededor de 53 mil durante las vendimias.

Para los jornaleros, las condiciones de vida, trabajo y asentamiento presentan contrastes notables en los cuatro condados. En Santa Bárbara y San Luis

Obispo el auge de la viticultura se vio favorecido por la presencia de trabajadores mexicanos asentados para quienes el trabajo en los viñedos es una alternativa adicional a una oferta más diversificada de empleo agrícola, generada por los lucrativos cultivos de vegetales y frutas que tienen lugar en los ricos y fértiles valles costeros y que, en no pocos casos, abren la posibilidad de trabajar gran parte del año.

Por su parte, los condados de Napa y Sonoma presentan un cuadro contrastante en la configuración del empleo rural. La expansión de los viñedos creció a la par del prestigio que rápidamente fueron ganando los vinos de la zona. A más viñedos, mayor necesidad de mano de obra. Cientos de trabajadores migrantes arribaron a la zona y paulatinamente fueron arribando también sus familias. Sin embargo, los trabajadores que lograron establecerse en las ciudades más emblemáticas del condado (Napa o Santa Helena), se han visto progresivamente desplazados por el alto costo de la vivienda y su creciente escasez. A pesar de los esfuerzos que algunas organizaciones realizaron en la promoción de viviendas de bajo costo para trabajadores y sus familias, éstas son insuficientes, al igual que los campamentos de vivienda para los trabajadores (tres en existencia), cuya capacidad es limitada y está pensada para alojar a los jornaleros varones únicamente en los periodos de mayor demanda de empleo.

A pesar de las diferencias en las dos zonas comentadas, los trabajadores que hacen posible la agricultura han sido clasificados como esenciales y tienen en común el vivir y trabajar en condiciones de gran vulnerabilidad y prácticamente sin posibilidades para ajustarse a las medidas de seguridad sanitaria que la pandemia requiere. •

Referencias

1. California Department of Food and Agriculture.
2. McLean. 2013. Wine, Meaning, and Place: Terroir-Tourism, Concealed Workers and Contested Space in the Napa Valley. Tesis de doctorado. California: Universidad de California-Santa Bárbara.



Trabajadores en la vendimia, Condado de Napa. Martha J. Sánchez

El vino ha incrementado sus ventas en un 14% con respecto al mismo periodo del 2019. Podría decirse que la producción vitivinícola continúa como si no hubiera emergencia sanitaria. Esto no significa que las labores del campo se realicen en forma distinta a las condiciones de precariedad tradicionales, por el contrario, sus trabajadores enfrentan nuevos retos.



La emergencia sanitaria condujo a una tregua tácita en la deportación de trabajadores sin papeles.

CALIFORNIA

El jornalero incómodo: trabajador esencial [pero] indocumentado

Hugo Santos Gómez Universidad de California-Santa Bárbara
Martha Judith Sánchez Gómez Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

Como una medida de contención del COVID-19, el gobierno norteamericano determinó la suspensión de un gran número de actividades económicas, exceptuando las consideradas esenciales. Las cadenas agroproductivas entraron en esta clasificación, por lo que la agricultura ha continuado con sus operaciones regulares.

La pandemia ha visibilizado la importancia de los jornaleros para la agricultura de Estados Unidos, al considerarlos trabajadores esenciales. Esos trabajadores son principalmente migrantes, inmigrantes y mexicanos; el 19% de ellos son migrantes (NAWS, 2018)¹.

California es el estado que concentra la mayor cantidad de jornaleros: cerca de 900 mil, que equivalen a entre un tercio y la mitad de un total estimado en 2.3 millones de personas. En gran medida esa fuerza de tra-

bajo se compone de trabajadores con condiciones precarias y según la NAWS el 49% carece de documentos. Sin embargo, la magnitud de la emergencia sanitaria condujo a una tregua tácita en la deportación de trabajadores sin papeles. En caso de ser abordado por personal del ICE (*Immigration and Customs Enforcement Agency*), con una breve nota del empleador indicando que el portador trabaja en una actividad esencial, basta para no ser detenido. La cadena agroalimentaria debe seguir operando en el contexto de la pandemia.

Los trabajadores agrícolas en California presentan un espectro variado de condiciones que va desde quienes gozan de ciudadanía plena, los que tienen residencia permanente (*green card*) o permisos temporales (visados H-2A para trabajo agrícola temporal) hasta los indocumentados.

Debido al cierre total o parcial de consulados y embajadas

de EEUU en los países de origen de los jornaleros (señaladamente México), y como medida de apoyo a los agricultores en el contexto del COVID-19, los procedimientos burocráticos para la contratación de trabajadores agrícolas extranjeros vía los visados H-2A se han simplificado. Este tipo de programas de trabajo temporal ha revivido un debate ya secular sobre

su papel como factor que intensifica la precariedad de las condiciones de trabajo de los jornaleros ya establecidos (con o sin “papeles”).

El hecho de que el trabajador agrícola continúe laborando en el contexto de emergencia sanitaria tiene varias implicaciones. Para los migrantes asentados tiene repercusiones en sus ingresos y en las limitaciones para protegerse ante la pandemia. A partir del cierre de escuelas, muchas familias se han visto precisadas a encomendar el cuidado infantil a los hermanos mayores, o bien recurrir a los servicios informales de guardería con conocidos, lo que implica una erogación monetaria adicional. Además, estos trabajadores no cuentan con las condiciones requeridas para evitar los contagios; ni en los campos de cultivo, ni en la vivienda —el hacinamiento es común—, ni en el transporte hacia el lugar de trabajo.

Para quienes poseen visas H2A, es común encontrarse con lugares de alojamiento que no cuentan con las condiciones adecuadas. En el estado de Washington varias organizaciones civiles y de trabajadores agrícolas lograron que el gobierno estatal determinara que la vivienda destinada a los trabajadores temporales contratados con visados H-2A fueran espacialmente redistribuidas, a fin de que se aplicaran los lineamientos de distanciamiento social. La respuesta no se hizo esperar y diversas asociaciones de agricultores del estado objetaron la nueva reglamentación, argumentando que su aplicación incrementaría los costos y volvería insostenible la contratación de los jornaleros. El caso se encuentra en plena disputa.

A lo anterior se suman los riesgos de enfermedades endémicas en algunas regiones

rurales, como es el caso de la *Coccidioidomycosis* o “Fiebre del Valle”, que consiste en una infección por hongos que ataca principalmente los pulmones y en casos avanzados puede ocasionar la muerte. La carencia de seguro médico, común entre los jornaleros, agudiza el problema. La NAWS reporta que sólo el 47% cuenta con un seguro médico, mayormente de los llamados seguros insuficientes; sólo cubren una fracción del coste de los tratamientos.

Por otro lado, las medidas de mitigación económicas aplicadas por el gobierno norteamericano han resultado insuficientes y excluyen a una proporción muy alta de jornaleros. La entrega de 1,200 dólares por adulto llega solo a quienes cuentan con “papeles”. A contrapelo de las políticas de Washington DC, el gobierno de California, con auxilio de asociaciones filantrópicas, ha creado un fondo de 75 millones de dólares a fin de asignar 500 dólares por una sola ocasión a 150 mil trabajadores sin documentos. El número de beneficiarios será muy reducido, pues en el universo de potenciales beneficiarios se incluyen tanto a los trabajadores del campo como a los de la ciudad.

A pesar de las dificultades señaladas, el solo pensar en el cierre de los campos y con ello perder su fuente de subsistencia, ha llevado a muchos jornaleros a expresar: “no es bueno que estén duro y duro con eso del coronavirus, lo único que van a conseguir es que nos dejen sin trabajo”. La preocupación es legítima, los riesgos son altos y los costos corren mayormente por cuenta de quienes hacen posible la próspera agricultura californiana. •

Referencias

1. National Agricultural Workers Survey, 2018.



La cadena agroalimentaria debe seguir operando en el contexto de la pandemia.

“No es bueno que estén duro y duro con eso del coronavirus, lo único que van a conseguir es que nos dejen sin trabajo”.



El trabajador debe ser provisto de un alojamiento limpio, seguro y adecuado... ésta es la realidad. Ofelia Becerril, junio 2002



Casa de trabajadoras de una granja de Leamington, provincia de Ontario. Ofelia Becerril, junio 2002

Impacto del COVID-19 en el trabajo y la salud de migrantes mexicanos en Canadá

Ofelia Becerril Quintana El Colegio de Michoacán

El COVID-19 ha cambiado el trabajo y la vida de los migrantes mexicanos, hombres y mujeres, que laboran año con año en Canadá, por medio del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT). El 9 de abril 2020, el Consulado de México en Vancouver informó que 19 de 65 trabajadores empleados en una granja de Columbia Británica dieron positivo a COVID-19 (EFE, 2020).

Después de 45 años del PTAT los trabajadores agrícolas son imprescindibles pero no cuentan con condiciones adecuadas de trabajo y salud. Para el gobierno canadiense los trabajadores

mexicanos son imprescindibles y su contratación permite fortalecer la seguridad alimentaria de Canadá. México se comprometió con la reactivación del PTAT. La investigación realizada en ambos países muestra que en 45 años de funcionamiento del Programa es evidente la contribución económica de los trabajadores mexicanos a la agroindustria alimentaria canadiense, de ahí el crecimiento del Programa. El número de trabajadores mexicanos del PTAT se ha incrementado de 203 en 1974 a 25,637 en 2019, y de 37 trabajadoras en 1989 a 770 en 2019 (STPS, 2019, Gráfica 1).

Hoy en día prevalecen precarias condiciones de trabajo y ningún trabajador goza de es-

tatus legal pleno. El contrato de empleo establece que el trabajador debe laborar entre seis semanas y ocho meses, ser provisto de un alojamiento limpio, seguro y adecuado y recibir el salario mínimo agrícola. En la práctica hay incumplimiento en el pago de compensación a trabajadores por enfermedad o accidentes de trabajo y en el seguro médico ocupacional y no ocupacional, y cuando los migrantes llegan a Canadá algunos empleadores les quitan la tarjeta de salud.

Fuentes de riesgo

A pesar del contexto de la pandemia, los trabajadores del PTAT no han dejado de laborar y constituyen una población altamente vulnerable por cinco fuentes de riesgo a su salud: 1) la alta movilidad de migrantes y las condiciones en que viajan desde múltiples localidades de México a diversos sitios de nueve provincias canadienses constituyen una fuente de vulnerabilidad y de expansión del contagio debido a que se trasladan en camión, avión y camioneta. Entre abril y mayo viajarán en vuelos privados 9 mil trabajadores (Martínez, 2020), justo cuando la pandemia alcanzará su mayor pico; 2) los trabajadores laboran en espacios abarrotados trabajando uno muy cerca del otro; 3) las condiciones de vivienda caracterizadas por el hacinamiento, pues muchas empresas albergan a los trabajadores en cuartos muy pequeños o en trailers descompuestos. Comparten la vivienda entre 15 y 20 trabajadores por casa. También hay habitaciones tipo galeras cuyo interior está acondicionado con literas co-

locadas en fila, por lo que el hacinamiento es mayor (fotos 1 y 2). Lo que significa que no pueden mantener una distancia de 1 a 3 metros, medida importante para evitar el Covid-19; 4) los trabajadores no son provistos con traductores o capacitación de inglés o francés y la barrera del idioma es una limitante para que puedan acceder al sistema de salud; 5) rebotes de Covid-19 en caso de regresar enfermos con sus familias y comunidades de origen por el riesgo de propagación del virus en la población rural mexicana.

Acciones urgentes de atención binacional

Es urgente implementar acciones binacionales, entre distintos actores, como parte del reforzamiento del PTAT para garantizar el acceso a los servicios de salud de los trabajadores. Una primera tarea es el reforzamiento de la protección consular mexicana en la supervisión de las condiciones de trabajo y vivienda para evitar el hacinamiento y garantizar los derechos de salud, laborales y la seguridad de los migrantes. Es necesaria la coordinación entre instituciones que administran el PTAT con organizaciones y centros de apoyo a migrantes para generalizar brigadas de información y salud. El impacto del COVID-19 en el trabajo y la salud de migrantes mexicanos en Canadá debe de estar en la agenda política binacional de ambos países. •

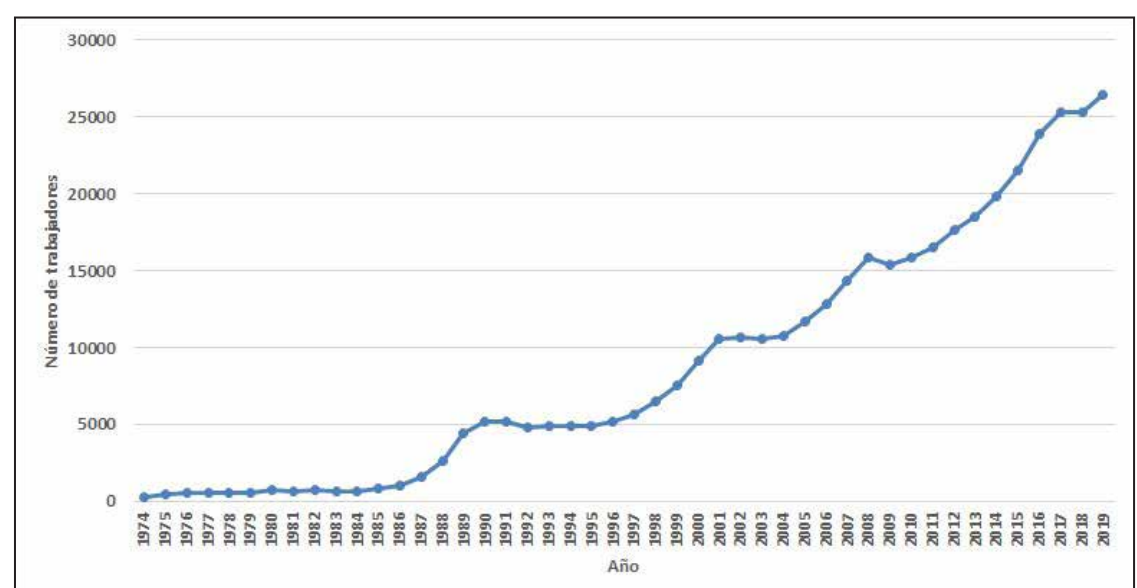
Referencias

EFE, "Un grupo de 19 trabajadores mexicanos en Canadá son positivos a COVID-19", 9 de abril de 2020. Disponible en www.telemundochicago.com/noticias/mexico/un-grupo-de-19-trabajadores-mexicanos-en-canada-son-positivos-a-covid-19/2080886/.

Martínez, María del Pilar, "Trabajos agrícolas temporales en Canadá continúan pese a contingencia por Covid-19", *El Economista*, 19 de abril de 2020. Disponible en www.eleconomista.com.mx/empresas/Trabajos-agricolas-temporales-en-Canada-continuan-pese-a-contingencia-por-Covid-19-20200419-0015.html.

STPA. Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Mexicanos a Canadá. Datos sobre Mecanismo de Movilidad Laboral a Canadá (1974-2019).

GRÁFICA 1. EMPLEO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES MEXICANOS DEL PTAT (1974-2019)



Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría del Trabajo y Previsión Social

... ningún trabajador goza de estatus legal pleno. El contrato de empleo establece que el trabajador debe laborar entre seis semanas y ocho meses, ser provisto de un alojamiento limpio, seguro y adecuado y recibir el salario mínimo agrícola. En la práctica hay incumplimientos...



Viñedos en el valle de Okanagan.

CANADÁ

La preocupación es que los trabajadores agrícolas no contagien a los residentes locales

Patricia Tomic y Ricardo Trumper

Los primeros casos de COVID-19 en Canadá se presentaron, lentamente, en enero. Hacia mediados de marzo el gobierno federal y los gobiernos provinciales comenzaron a aplicar diversas medidas para controlar el contagio. Así, el Estado impidió el acceso de no residentes al país y también se paralizaron las actividades económicas consideradas no esenciales. Junto con estas medidas, rápidamente, en forma más o menos voluntaria, la población se recluyó en sus casas siguiendo disciplinadamente el mensaje constante de quedarse en casa, de guardar 2 metros de

distancia con otras personas, de lavarse las manos a menudo, de no llevarse las manos a la cara.

En Canadá, la parálisis económica ha sido considerable. El producto bruto ha caído vertiginosamente. Sectores privilegiados trabajan a distancia. Para muchos otros, el gobierno federal ha fortalecido el programa de seguro de desempleo y otros programas de apoyo económico que han sostenido tanto a millones de desempleados como a empresarios.

Entre las actividades esenciales está la agricultura. Una parte importante del trabajo agrícola en Canadá lo efectúan trabaja-

dores migrantes, quienes hacen posible la producción de hortalizas, frutas, viveros y viñas. En años recientes Canadá ha requerido alrededor de 60,000 trabajadores temporales anuales. Las medidas para contener la pandemia que restringen el ingreso de no residentes pusieron en peligro la llegada de los migrantes temporales. Aunque hay millones de

trabajadores y trabajadoras desempleados, las industrias agrícolas se encontraron sin mano de obra.

En lugar de cambiar las condiciones de trabajo para atraer mano de obra local, los empresarios y sus organizaciones se movilizaron para presionar contra el cierre de fronteras. Irónicamente, para que los salarios de los migrantes sean bajos, para imponer condiciones serviles, y justificar inmigración solamente temporal el argumento ha sido que estos trabajos no requieren capacitación. En estos momentos, en cambio, el argumento principal de los empresarios ha sido que el trabajo agrícola no puede ser realizado por canadienses sin experiencia, pues es un trabajo que requiere alta capacitación.

El gobierno aceptó reabrir las fronteras para trabajadores con visa de trabajo temporal. Impuso condiciones de cuarentena por 14 días para los migrantes a su llegada, subvencionando a los empleadores con fondos estatales, algunas condiciones mínimas para el alojamiento que deben proveer los empresarios y coberturas médicas dentro de los planes de salud provinciales. Sin embargo, se continúa aceptando que los migrantes vivan en condiciones de cercanía que hacen muy difícil mantener la distancia social.

Como ha demostrado la pandemia, los espacios de confinamiento, ya sean hogares de ancianos, cárceles o barracas para trabajadores, son focos de infección. Ya se sabe de dos brotes entre trabajadores migrantes, probablemente contagiados en Canadá. A pesar de ello, la preocupación es que los trabajadores no contagien a los residentes locales. Uno de los focos de esta preocupación es Ontario, donde

trabajadores jamaicanos se han contagiado y otro en el valle del Okanagan, en British Columbia, en uno de los mayores viveros del lugar.

El valle del Okanagan es un área donde la agricultura tiene un rol importante. Se producen manzanas y cerezas para mercados en Canadá y diferentes partes del mundo. Además, el Okanagan es un área de viñedos y bodegas que producen vinos caros, en general, para consumo en el mismo valle. El trabajo agrícola mismo lo hacen unos 1500 trabajadores provenientes de Quebec, 1500 mochileros de distintas partes del mundo y 4500 mexicanos, caribeños y otros trabajadores migrantes.

El 70% del trabajo intensivo en la viñas es ejecutado por trabajadores migrantes, de allí que su presencia sea esencial para continuar con el modelo de explotación agrícola existente. Los migrantes son especialmente importantes porque con la pandemia, tanto los trabajadores de Quebec como los mochileros no irán a trabajar al Okanagan. Por otro lado, la producción de vino está ligada principalmente al turismo, un turismo que ha desaparecido con la pandemia. De allí que es dudoso que las empresas y los trabajadores relacionados con turismo, los chefs, cocineros, meseros y degustadores puedan continuar operando como antes; que muchas empresas tengan que reinventarse para vender el vino a través de la Internet o clubes; y que mucho de los restaurantes estén liquidando sus inventarios de vinos vendiéndolos en línea. La pandemia parece estar reorganizando el Okanagan, pero no el modelo de trabajo que depende de la explotación y el riesgo de los migrantes. •

El 70% del trabajo intensivo en la viñas es ejecutado por trabajadores migrantes, de allí que su presencia sea esencial para continuar con el modelo de explotación agrícola existente. Los migrantes son especialmente importantes porque con la pandemia, tanto los trabajadores de Quebec como los mochileros no irán a trabajar al Okanagan.



Viñedos en el valle de Okanagan.

Vulnerabilidad y precariedad de los cosecheros en Argentina

María Brignardello Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Salvador **Raúl Novello** Estación Experimental Agropecuaria Junín, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria **Germán Quaranta** Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Universidad Nacional Arturo Jauretche



El transporte se da en condiciones de hacinamiento.

Argentina es un país de tradición vitivinícola; según la International Organization of Vine and Wine, es el quinto productor mundial de vino. Mendoza, perteneciente a la región de Cuyo, es, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (2020), la principal provincia vitivinícola del país, con el 71% de la superficie de vid implantada (151,500 hectáreas), 68% de las uvas cosechadas (17,100,000 quintales) y 71% de los vinos y mostos elaborados (13,133,000 hectólitros).

La cosecha, tarea que demanda mayor cantidad de trabajadores, estaba en plena ejecución el 20 de marzo pasado, cuando el gobierno argentino determinó el aislamiento social obligatorio y preventivo de la población frente a la declaración de la pandemia COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. Al tratarse de una actividad

considerada esencial, los actores involucrados (trabajadores, sindicatos, empresarios y organismos de gobiernos) enfrentaron diferentes desafíos y conflictos para completar esta tarea definitiva para la producción.

En Mendoza, la cosecha de uva -ejecutada entre febrero y abril- se realiza en gran proporción de forma manual (70%) e involucra de manera temporal entre 15,000 y 20,000 cosechadores. La cosecha manual se organiza a partir de cuadrillas de 20 personas, a quienes se les entrega una gamela de 18 a 20 kg de capacidad y una tijera cosechera. Para realizar la tarea llenan la gamela que transportan al hombro hasta el camión que lleva la uva a la bodega. En promedio, un trabajador cosecha entre 60 y 90 gamelas diarias, dependiendo de su velocidad y el rendimiento del viñedo.

La mayoría de estos trabajadores se encuentran cubiertos

por un régimen legal no nominal (convenios de corresponsabilidad gremial) sumamente precario, que no implica mejores condiciones de ocupación para los trabajadores. Esta desprotección se agrava para los trabajadores migrantes transitorios que proceden en gran parte de provincias del norte del país. La mano de obra migrante, que representa aproximadamente el 20% de los cosecheros, es resultado de una estrategia empresarial de segmentación de la fuerza de trabajo más que de posibles déficits de oferta de mano de obra local.

Las malas condiciones de vida y trabajo que afectan a los cosecheros se profundizan en el marco de las amenazas que implica el brote de COVID-19. El transporte hacia los sitios de producción de las empresas de mayor tamaño se realiza en autobuses con capacidad para trasladar un par de cuadrillas; en los establecimientos más pequeños suele llevarse a cabo en las cajas de los camiones. Los baños o instalaciones sanitarias son pocos en los lugares de trabajo y cuando existen, por lo general, resultan de difícil acceso por las distancias.

Las condiciones de hábitat y vivienda de las familias de los cosechadores se suman a las condiciones de riesgo presentes en los lugares de trabajo. Las situaciones de hacinamiento y la limitada disponibilidad de infraestructura sanitaria como la ausencia de agua corriente dentro de la vivienda o del baño, son

una traba para acatar los cuidados básicos recomendados. Para los trabajadores migrantes este escenario puede empeorar dadas las condiciones de alojamiento prevalecientes.

Frente a la cuarentena, mientras que los empresarios buscan acelerar las tareas de cosecha, la provincia define un protocolo que establece medidas destinadas a garantizar la higiene y el distanciamiento social como el lavado de manos, la limpieza de comedores, respetar distancias en la ejecución de tareas y en el traslado de los trabajadores, etc.

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) señala que el ámbito apropiado para discutir condiciones de trabajo es el marco de los convenios colectivos y plantea suspender la cosecha, dado que en los lugares de trabajo no se respetan las medidas mínimas de cuidado. Las entidades empresariales sostienen que el sindicato no garantiza la condición de esencialidad que el decreto presidencial otorga a la actividad y reclaman el normal desenvolvimiento de la cosecha. En este escenario se abre un espacio de negociación para la aplicación del protocolo que pauta la forma de llevar adelante la cosecha y FOEVA requiere en el marco del convenio colectivo de trabajo la ampliación de las medidas tomadas. Sin embargo, avanzada la cosecha el sindicato denuncia el incumplimiento del protocolo en la mayoría de las fincas por la falta de controles que lo convierte en declaraciones de buena voluntad.

Una consecuencia de la restricción a la movilidad entre

provincias fue la aglomeración de cientos de trabajadores migrantes transitorios en la terminal de autobuses de larga distancia de Mendoza. Esta situación se sostuvo hasta fines de abril dadas las prohibiciones existentes y la falta de coordinación entre algunas autoridades departamentales locales y de las provincias de origen de los trabajadores.

Los hogares de estos trabajadores perciben los beneficios que el gobierno nacional implementó para los sectores más vulnerables del país. De esta manera, aquellos cubiertos por la Asignación Universal por Hijo (AUH), transferencia monetaria directa a familias con menores no alcanzados por las asignaciones familiares contributivas, reciben un ingreso adicional correspondiente al Ingreso Familiar de Emergencia. Los trabajadores informales cuyas familias no están cubiertas por la AUH pueden acceder a estos ingresos previa inscripción en un registro. Esta inscripción puede dificultarse dada la modalidad de implementación que demanda el acceso a una computadora personal y servicio de internet. En tanto que las familias receptoras de AUH con mujeres embarazadas o niños de hasta seis años que perciben la Libreta Alimentaria son alcanzadas por partidas adicionales que refuerzan los montos originalmente otorgados. Además, el gobierno actualizó la suma de dinero otorgada a través del Programa Intercosecha a los trabajadores migrantes temporarios procedentes del norte del país.

Las condiciones económicas, sociales y laborales se vieron afectadas por la pandemia profundizando las desigualdades sociales existentes en nuestras sociedades. Los trabajadores, engranaje esencial de la producción de vinos de calidad para el consumo de sectores medios y altos del mercado global, trabajan y viven en condiciones sumamente precarias que incrementan su vulnerabilidad frente a la pandemia del COVID 19. •



Los sanitarios están alejados de las zonas donde se lleva a cabo el trabajo.

Las situaciones de hacinamiento y la limitada disponibilidad de infraestructura sanitaria, como la falta de agua corriente en la vivienda y el baño, son una traba para acatar los cuidados básicos recomendados. Para los trabajadores migrantes este escenario puede empeorar, dadas las condiciones prevalecientes de alojamiento.



Al injertador le toma años de trabajo el adquirir experiencia en su oficio.

ARGENTINA

Se exportan injertadores

Martha Judith Sánchez Gómez Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM María Brignardello Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Salvador

En las zonas de producción de vinos del Nuevo Mundo Vitivinícola, que buscan posicionarse en mercados altamente competitivos, se realizan una serie de actividades a lo largo del ciclo anual, con el objetivo de lograr uvas de calidad. Estas actividades requieren diferentes perfiles de trabajadores en momentos puntuales del ciclo anual.

Una de estas actividades se refiere a la práctica del injerto, que requiere la habilidad y conocimiento de los injertadores. Estos trabajadores realizan una labor especializada, temporal y que demanda un esfuerzo físico importante; trabajan en la tierra, a la intemperie y sujetos a las inclemencias del tiempo. Si el trabajo se realiza en vivero y no se realiza en mesa sino en el suelo conlleva también un fuerte desgaste físico. Para lograr buenos resultados, el injertador debe desarrollar una destreza que requiere acumular experiencia a lo largo de los años. Dicha destreza no es retribuida en términos económicos ni reconocida socialmente; así lo expresa la mujer de un injertador “ellos no tienen vacaciones, ellos no tienen nada, le digo yo. Por ahí son mal mirados, porque a lo mejor andan mal vestidos o que se yo”. El hijo de un injertador comenta: “Suele pasar

que los dueños de fincas los tratan como ignorantes y quieren pagarles menos”.

Dependiendo del país en donde se realice el injerto encontramos variantes en el perfil de los trabajadores, la forma de organizar del trabajo y la remuneración.

Argentina: trabajadores especializados

En las últimas décadas el injerto en Mendoza, principal provincia productora de uvas y vino de Argentina, ha servido al proceso de reconversión productiva. En dicho proceso, el cambio de la estructura varietal por variedades de alta calidad enológica, principalmente Malbec, es un componente fundamental.

Los inicios del trabajo del injerto se remontan a la llegada de un italiano al departamento de Rivadavia, quien enseña a los pobladores de la localidad Santa María de Oro. Actualmente, los habitantes de esa población tienen un gran prestigio y reconocimiento, llegando a nombrar al lugar como “la cuna de los injertadores”.

El injerto es un trabajo que está caracterizado por la informalidad, no median contratos, ni entre el finquero que solicita la actividad, ni entre el cuadrillero injertador y sus obreros. La organización del trabajo implica

una jerarquía ascendente con posibilidades de independizarse. En lo más alto de la jerarquía está el cuadrillero injertador, que percibe los mayores ingresos y que generalmente es un varón, son muy pocas las mujeres cuadrilleras. El prestigio acumulado por el trabajo bien realizado a lo largo de décadas le permite tener contratos en la temporada de injertos. Además de conseguir los contratos, el cuadrillero-injertador debe contar con recursos económicos suficientes para hacerse cargo de los gastos que este trabajo implica. Entre ellos, encontramos el transporte: si el lugar de trabajo no excede los 100 km., recoge a los obreros en sus hogares, concentrados espacialmente en Santa María. Si la distancia es mayor a 100 km el injertador cuadrillero se encarga, además del desplazamiento, de proveer alojamiento y alimento durante la estancia. Asimismo, debe responder por la calidad del trabajo realizado; en caso de no cumplir el porcentaje de prendimiento esperado, tiene implicaciones en el pago pactado.

Le siguen en jerarquía los ayudantes que tienen mayores responsabilidades e ingresos que los obreros. Sus tareas pueden ir desde el traslado y pago semanal de los trabajadores, la organización y supervisión del trabajo, hasta la elaboración de las comidas en

caso de que se requiera. Generalmente, el ayudante del cuadrillero-injertador es un miembro de su grupo familiar, varones preferentemente, pero también mujeres o, en su defecto, algún trabajador de confianza. Finalmente, en la base, están los obreros, que realizan tanto el injerto como el atado, trabajando en parejas, y reciben un pago semanal. Con el tiempo los obreros pueden ascender a ayudantes y/o eventualmente independizarse y formar su propia cuadrilla, aunque es un proceso complicado porque deben competir en un mercado crecientemente saturado. En contextos de crisis disminuye la demanda de esta actividad, ya que es un trabajo que implica costos elevados para los productores.

Además de la informalidad del empleo, que conlleva vulnerabilidad económica y desprotección social, en el contexto de la pandemia del COVID-19 se potencializa la precariedad de estos trabajadores. En principio, las tareas agrícolas en Argentina formaron parte de las actividades exceptuadas a la cuarentena decretada por el gobierno nacional el día 20 de marzo. No obstante, en el trabajo del injerto no es posible guardar la distancia exigida por las políticas de distanciamiento social, ya que, como mencionamos, el injerto se realiza de a pares. Además, dentro

de los riesgos para estos trabajadores está el transporte al lugar de trabajo: el cuadrillero suele contar con una sola camioneta, en la que viaja la mayor cantidad de trabajadores posible. Asimismo los lugares de alojamiento suelen ser comunes, precarios y en condiciones de hacinamiento.

En el trabajo de vivero los injertadores han visto modificada su rutina de trabajo: horarios escalonados para reducir las personas trabajando al mismo tiempo, utilización de barbijos y máscaras protectoras. No obstante, no se mencionan otras medidas señaladas en las Buenas Prácticas para la Producción Agropecuaria para el COVID-19, como el control de temperatura diario, acceso a elementos necesarios para la higiene personal, mayor desinfección del lugar de trabajo y de lugares comunes.

El prestigio que han ganado estos trabajadores los ha llevado a trabajar fuera de su región, incluso en países vecinos -Chile, Uruguay- y en países europeos. Esta movilidad si bien representa un complemento importante para sus ingresos, también conlleva vulnerabilidades relevantes como la temporalidad, la informalidad y las condiciones en que se ingresa en otros países. El cierre de fronteras y las restricciones a la movilidad son retos a los que ahora tendrán que enfrentarse. •



Fotografías tomadas en el marco del proyecto de estancia sabática Martha J. Sánchez, PASPA-DGAPA-UNAM.

El prestigio que han ganado estos trabajadores los ha llevado a trabajar fuera de su región, incluso en países vecinos -Chile, Uruguay- y en países europeos. Esta movilidad si bien representa un complemento importante para sus ingresos, también conlleva vulnerabilidades relevantes como la temporalidad, la informalidad y las condiciones en que se ingresa a otros países.

RIBERA DEL DUERO

Llegó el momento de regularizar a quienes trabajan en el campo



En los viñedos de la Ribera del Duero los trabajadores en la agricultura son migrantes e inmigrantes.

Martha Judith Sánchez Gómez Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

La comarca de la Ribera del Duero en España ha pasado de ser una comarca deprimida económicamente y sin posibilidades de futuro para sus habitantes a convertirse en la actualidad en la zona más dinámica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, gracias al prestigio que han adquirido sus vinos.

Las actividades que anteriormente realizaban las familias que contaban con pequeños majuelos (terrenos) de viñas y trigo han cambiado radicalmente. Ese cambio ha implicado no sólo nuevas actividades sino también de nuevos sujetos. La cultura y las formas de organización social marcaban el inicio de la vendimia; el ayuntamiento la anunciaba después de la celebración de la fiesta de la Virgen del Pilar. Esa fecha representaba para las familias momentos especiales de convivencia y trabajo conjunto; hijos, padres y vecinos trabajaban y celebraban, compartían y departían comida y trabajo.

Esa forma de trabajo ha quedado en el pasado. En la actualidad, la denominación de origen Ribera del Duero, guiada por los técnicos que señalan el grado de azúcar de la uva, da inicio al periodo de la vendimia. Y en lugar de la algarabía y festejo se vive una situación de gran tensión; es la culminación de una serie de actividades y gastos que tienen que concretarse con la cosecha de unas uvas de la calidad requerida, sin que las llegue a dañar el granizo o la podredumbre, y que cumplan la inspección que realizan los veedores de la denominación de origen para ingresarlas a las propias bodegas o a bodegas con las que previamente se ha acordado la venta de una parte o de toda la cosecha. Además de lo anterior, hay una gran tensión por conseguir a los trabajadores para la vendimia (cosecha) en el momento y cantidades que se les requiere. En otras palabras, se requieren trabajadores en cantidades inciertas, ya que depende de la cantidad de cosecha, en fe-

chas aproximadas, de septiembre a octubre, y por periodos indeterminados, dependiendo del clima y de los cupos de las bodegas. Además de ese periodo que es el de máxima ocupación de trabajadores hay otros dos periodos que requieren mano de obra adicional a la que participa a lo largo del año, estos son la poda en verde y la poda. ¿Cómo se resuelve la necesidad de mano de obra en esas condiciones?

Del trabajo familiar a la mano de obra migrante

Al igual que gran parte de la agricultura mediterránea, en los viñedos de la Ribera del Duero los trabajadores en la agricultura son migrantes e inmigrantes provenientes de diferentes países y sujetos a diversas formas de contratación. En este lugar en-

contramos diferentes mecanismos de acceso a la mano de obra. Por un lado, las redes creadas durante el periodo de contratación en origen siguen funcionando; los rumanos y búlgaros que participaron en ese programa siguen llegando o algunos de ellos ya se han establecido en la zona. Las redes también funcionan con trabajadores que han realizado esas labores con ciertas bodegas o viticultores año con año; habitantes de Andalucía y jóvenes españoles que hacen la temporada de trabajo como una manera de allegarse de recursos. En esos casos la contratación es directa con el viticultor o con una pequeña o mediana bodega. Las grandes bodegas pueden combinar la contratación de trabajadores mediante su departamento de personal y el acceso a los que se requieren en las temporadas pico de empleo mediante las empresas de trabajo temporal, las denominadas ETT.

El perfil de las ETT es variable; desde las unipersonales, sin constitución formal y con condiciones de salarios y empleo diversas, hasta las formalmente constituidas y con apego a las condiciones del contrato para los trabajadores del campo. Estas empresas recurren a trabajadores migrantes de diversos orígenes: rumanos, búlgaros, marroquíes y de otros países africanos, latinoamericanos, hindúes, todos ellos con diferentes condiciones migratorias: migrantes, inmigrantes, establecidos, circulares y con una estancia regularizada o no.

La contratación mediante las ETT es el mecanismo de mayor importancia en la zona, no solo lo utilizan las grandes empresas sino también pequeños, medianos bodegueros y viticultores. Ese mecanismo es una estrategia de segmentación del mercado de

trabajo que conlleva al deterioro de las condiciones de trabajo y de los salarios, y de externalización de los costos y responsabilidades que representa esa mano de obra.

En el contexto del COVID-19 se hace explícita la dependencia de las actividades agrícolas en el trabajo migrante. En los medios se señala el riesgo existente para levantar las cosechas por la falta de trabajadores: “el gobierno admite que faltan unos 150,000 trabajadores para levantar las cosechas”¹, lo que ha llevado a que se flexibilice la contratación de inmigrantes y parados y se amplíen los permisos de residencia para los trabajadores a quienes se les vence. Se reconoce la importancia de los migrantes para esas cosechas que corren el riesgo de no ser recogidas y con ello llevar a problemas de abastecimiento y por consiguiente del encajecimiento de los productos, y aún más, de afectar las rentas de España ya que dos partes de su producción se exporta a la Unión Europea.

Hay una iniciativa en España #Regularización ya², que señala la urgente regularización de las personas migrantes y refugiadas, que ha sido firmada por más de 100 organizaciones y ha logrado también el respaldo de 1,000 colectivos, entidades y ONG. Esa iniciativa exige un cambio en el modelo migratorio. ¿No es éste el momento de reconocer el aporte e importancia del trabajo de estos migrantes y de regularizar su situación y de mejorar sus condiciones de vida y trabajo? Espéremos que sí lo sea. •

Referencias

1. Información disponible en: www.el-mundo.es/economia/2020/04/07/5e8c406efdddf9b18b4631.html.
2. Información disponible en: www.el-mundo.es/economia/2020/04/07/5e8c406efdddf9b18b4631.html.

Las empresas de trabajo temporal recurren a trabajadores migrantes de diversos orígenes: rumanos, búlgaros, marroquíes y de otros países africanos, latinoamericanos, hindúes, todos ellos con diferentes condiciones migratorias: migrantes, inmigrantes, establecidos, circulares y con una estancia regularizada o no.



Fotografías de Martha J. Sánchez en el marco del proyecto La expansión de las zonas vitivinícolas y el trabajo inmigrante. Estudio comparativo Estados Unidos y España. Proyecto Conacyt.

Extractivismo y género

Andshieli Morales y Leonardo Bastida

La ecología es una disciplina encargada de estudiar las interacciones de los seres vivos con el medio físico, y desde una perspectiva política, estudia también la construcción social del ambiente y el uso de los recursos naturales y los factores sociales, económicos y políticos que los determinan bajo condiciones de poder desiguales.

Estos planteamientos teóricos se suma la visión feminista que pone acento en las diferencias de género con respecto al cómo se vive la experiencia de la naturaleza, los intereses y responsabilidades sobre ella y las formas de habitar el ambiente, sumada a la necesidad de comprender e interpretar las experiencias locales, colocar al género como una variable crítica que impacta en el acceso a los recursos y su control, interrelacionarlo con otras categorías

como la clase, la raza y la etnicidad, así como indagar las maneras en que se construyen los mitos sobre las mujeres como “más cercanas a la tierra”.

Desde estas referencias teóricas, Sussane Hofmann y Melissa Cabrapan lograron conjuntar a diferentes investigadores y expertas en el tema de extractivismo, defensa del territorio, género y feminismo para dar forma al libro *Género, sexualidades y mercados sexuales en sitios extractivos de América Latina* (CIEG UNAM, 2019), en cuyo

contenido hay diversos ensayos, artículos e investigaciones etnográficas sobre extractivismo en Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú, para reflexionar sobre si la extracción de recursos nacionales y los regímenes políticos vigentes son temáticas para discutir fuera del ámbito meramente normativo o económico.

A través de estos trabajos, también replantean la conceptualización tradicional del extractivismo, comúnmente asociada a un modelo económico en el que se involucran actividades de extracción de recursos de la naturaleza por parte de industrias y de neoextractivismo, definido como un modelo basado en el rechazo de las políticas neoliberales y la nacionalización parcial de algunas industrias extractivas a fin de tener un control político más férreo de los recursos y las ganancias y elaborar programas sociopolíticos.

Además de buscar comprender cómo operan los regímenes extractivistas en la configuración de los géneros de quienes participan en ellos, el papel de las mujeres y la definición de las masculinidades en los sitios extractivos, la generación de mercados sexuales alrededor de estos sitios y el surgimiento de discursos que cuestionan las políticas de desarrollo por dejar a un lado el bienestar de las personas y del planeta.

Experiencias

Sobre las experiencias recabadas, Cabrapan, coordinadora del libro y autora de uno de los artículos, menciona que este destaca fenómenos sociales como la industria petrolera y su regulación, sexualidades disidentes, interacciones erótico-afectivas en contextos extractivistas, comunidad y familia en las mineras, división del trabajo y masculinización en espacios extractivos, expresión de la diferencia sexual y las mujeres en el extractivismo, entre otros, cuyas perspectivas comparten analogías y significados que las personas le otorgan al extractivismo a partir de

cuestiones estructuralistas como el deber ser y la construcción social, lo público y lo privado. En el mismo sentido, Jorge Peláez Padilla, de la Universidad Iberoamericana, considera que al hablarse de la defensa del territorio se han velado otras cuestiones como el extractivismo y el género, cuando en realidad se debe pensar en esta triada para proveer herramientas conceptuales que ayuden a entender a las personas que son afectadas con problemáticas normalizadas por dicho contexto. Para la antropóloga Marta Lamas, esta compilación aterriza temas que no son tocados comúnmente cuando se habla de mercados sexuales como la afectividad y abre preguntas sobre ¿cómo se da la venta de sexo-afecto en contextos extractivos? y ¿cómo florece el mercado sexual de diversos tipos?, para mostrar que la intersección entre la diversidad de formas de trabajo y los derechos sexuales y reproductivos aún son vistos como “innovaciones” que atraviesan el extractivismo y que no se notan o, al contrario, se satanizan.

[VERSIÓN COMPLETA EN LÍNEA >>](#)

Sembrando Vida, la posibilidad de cambiar el paradigma en el campo

Alfredo Álvarez

Antes de las elecciones y ya perfilada para ser la próxima Secretaría de Bienestar, la ingeniera María Luisa Albores estuvo en Colima en abril del año 2018. Luego de conocerle y sentirle, escribí una columna para el periódico local *Ecós de la Costa*, la cual titulé “Un nuevo paradigma de desarrollo social es posible” (1) y hoy puedo afirmar que el pilar de esa transformación es el Programa Sembrando Vida.

El programa estrella del gobierno federal arrancó en Colima el 14 de mayo del 2019, con la presencia de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, y el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Javier May Rodríguez. Colima era uno de los 19 estados elegidos para sembrar más de un millón de hectáreas y generar más de 400,000 empleos permanentes en el país.

Como ha dicho el presidente López Obrador, el campo es una reserva importante de valores, eso se evidencia día con día, al caminar los ejidos y darnos cuenta de que pese al intento neoliberal de despojarnos, incluso de la identidad, en los pueblos aún se conserva a través de la cultura,

costumbres y saberes que permiten preservar y mantener ejemplo vivo de que un mundo mejor es posible.

En Colima el Programa Sembrando Vida contempla reforestar 12,500 hectáreas en los 10 municipios del estado, ello, no es poca cosa, pues significa que el 2.2% de nuestro territorio, por primera vez será utilizado para llevar a cabo prácticas alternativas al modelo de despojo agroindustrial. Cinco mil sembradores y sembradoras tendrán acompañamiento permanente: un técnico productivo, para volver a hacer producir la tierra de manera orgánica, sin químicos, y un técnico social, quien tendrá la labor de ir fortaleciendo las diferentes cuestiones sociales concretas de cada ejido y localidad.

Territorio y no escritorio

Durante los gobiernos neoliberales se puso de moda la “ventanilla”, donde dependiendo del ciclo se abría y operaba en ciertos horarios, lo que obligaba a los campesinos y campesinas a trasladarse desde sus localidades a una oficina para entregar documentos y en caso de faltar alguno, volver. Con el nuevo gobierno ya es distinto, la ventanilla son los técnicos en territorio, ellos recaban los documentos y realizan estudio socioeconómico en los domicilios de cada potencial sembrador o sembradora y verifican que las parcelas cumplan con los lineamientos del programa.

Otro eje importante es que el programa permite la adaptabilidad y elección de especies de plantas desde los propios campesinos y campesinas, únicamente tienen que sembrarse mediante el sistema de Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF) y el Sistema AgroForestal (SAF), entre ambos sistemas cada sembrador deberá sembrar las 2.5 hectáreas. Con ello se busca garantizar primeramente la seguridad alimentaria en el corto plazo mediante la milpa, mediano plazo con árboles frutales y a largo plazo con los maderables.

Para ello a los 5,000 participantes que están en el programa en Colima se les paga un jornal de cinco mil pesos mensuales. Es importante resaltar las palabras de AMLO “Compañero, escucha, en la hamaca no se lucha”. Esto tiene sentido dado que el pasado informe presentado por parte de la Secretaría de Bienestar resalta que en 2019 fueron dados de baja casi veinte mil sembradores por no trabajar la tierra conforme a la indicación de los técnicos. Muestra de que el programa tiene como objetivo la transformación rural.

El territorio es como los dedos de la mano, cada uno tiene condiciones específicas, desde climáticas hasta sociales. En algunos ejidos encontramos resistencia a sembrar de manera orgánica, como lo hacían nuestros abuelos y abuelas, que no necesitaban de químicos y lograban alimentar a grandes ciudades, como Tenochtitlán, mediante el sistema milpa aplicado en chinampas. Y se atrevieron a llamarnos incivilizados.

Bases del nuevo paradigma

El programa cuenta con una planta de colaboradores formados en biología, agronomía y nutrición, entre otros. También cuenta con aportes de diversas instituciones, entre ellas la Conafor, la Semarnat, la Sagarpa, la Profepa y la Conagua.

Una de cada tres plantas será producida por los propios sembradores y sembradoras en los miles de viveros comunitarios que se construirán con ese fin.

La Secretaría de la Defensa Nacional retoma su papel de

proveedor de árboles forestales: a lo largo del país existen doce viveros militares, lo que permite generar empleos adicionales a los del programa.

En Sembrando Vida se fomentará el arraigo a los hombres y mujeres jóvenes en sus terruños. Cada técnico tiene 12 becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en quienes se busca inspirar compromiso con la comunidad y con el territorio.

En los viveros se fabricarán biofertilizantes con insumos locales, a fin de evitar la dependencia exterior, ahorrar costos y no contaminar. Al respecto, resalto un dato que nos proporciona el INEGI: en los pasados cinco años, Colima ha ocupado los primeros lugares en cáncer de mama y próstata. Reforestar el 2.2% del territorio servirá como ejemplo a otros campesinos de que se puede sembrar sin agrotóxicos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pone las cartas sobre la mesa al dedicarle al programa 28 mil 500 millones de pesos en este año. Representa la mayor inversión hecha para echar andar el campo mexicano con alternativas sustentables y sostenibles ante la crisis climática y de desnutrición. La solución no vendrá del sometimiento al modelo industrial, por ello, el éxito del programa está en manos del equipo operativo: técnicos, facilitadores, coordinadores territoriales y regionales, y también en la voluntad de los sembradores para transformar e impactar localmente.

[VERSIÓN COMPLETA EN LÍNEA >>](#)



Imagen oficial del aniversario de los 50 años de Cancún, Q. Roo.



Cosecha de la milpa. Ángel Sulub

De la propina del turismo al “tren de la salvación”

Ángel Sulub

Un aniversario en medio de la pandemia

En abril de este año, Cancún celebró su 50 aniversario, en medio de una pandemia. El gobierno estatal y municipal anunciaron previamente más de 200 actividades de celebración de lo que aseguran es un ejemplo de modelo de desarrollo económico, social y urbano. Alistaban un al mismo tiempo que muchas voces exigían un alto a los feminicidios en Cancún y la Riviera Maya, denunciaban ejecuciones, cobro de derecho de piso, incremento de la criminalidad, inseguridad, precarización de los trabajos, trata de personas, narcotráfico y miserables condiciones de vida. Los ambientalistas denunciaron una vez más la contaminación del manto freático, los mares y arrecifes, la pérdida de manglares y de selvas, y la grave situación de los tiraderos a cielo abierto a falta de un adecuado manejo de los residuos sólidos; todo lo que cotidianamente vive la zona.

El SARS CoV-2 COVID-19 puso la corona a su majestad Cancún. En el mes de su celebración la economía estaba paralizada con el desplome de la ocupación hotelera, lo que representó para miles de empleados la pérdida de sus trabajos. De acuerdo con el IMSS al finalizar marzo fueron más de 57 mil los despidos en Quintana Roo, la mayoría en Cancún y Playa del

Carmen. Miles de trabajadores viven no sólo el temor al contagio del virus, sino la incertidumbre laboral ante un panorama de emergencia sanitaria que se ha convertido en crisis económica para el sector turístico.

De vuelta a sus pueblos, miles de jóvenes mayas, mujeres y hombres, enfrentan una realidad compleja: un vínculo roto con su identidad y la necesidad económica, para solventar los gastos mínimos de una familia, que se agravará con la recesión económica mundial en puerta. Cada vez hay menos tierra, cientos de miles las hectáreas actualmente están en manos de empresas de energía, agroindustria, turismo e inmobiliarias.

La pandemia nos enfrenta a la reflexión de lo que somos como pueblo y de lo que hemos olvidado. Nos enfrenta a lo que queremos para la comunidad después de esta crisis. El colapso de la economía basada en el turismo nos demuestra la insostenibilidad del sistema capitalista que enajena e individualiza a la población, impone un modo de vida competitivo, y desarraiga y elimina el sentido de vida comunal.

Ha llegado el tiempo de volver la mirada a la milpa, dialogar con los abuelos y las abuelas y tejer nuevamente ese vínculo comunitario muchas veces roto desde la infancia por el sistema educativo del Estado que apostaron por la asimilación y la conversión del

indio al mestizo. Llegó el momento de valorar la ruralidad y reconocer que hay alternativas de vida saludables, y que son conservadas por muchos abuelos que han resistido el embate del neocolonialismo.

El tren de la salvación

Y también para abril de este año está previsto el inicio de la construcción del primer tramo del megaproyecto llamado Tren Maya, que va de Palenque, Chiapas a Escárcega en el estado de Campeche; y con él la generación de 80 mil empleos temporales que pretendidamente reactivarán la economía de la región después de la pandemia. El Proyecto integral de reordenamiento territorial, infraestructura, crecimiento económico y turismo sostenible, como se llama oficialmente, es un emblema del Gobierno Federal de la autodenominada cuarta transformación que, de acuerdo al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “conectará las principales ciudades y circuitos turísticos de la región para integrar territorios de gran riqueza natural y cultural al desarrollo

turístico, ambiental y social en la región”. Este proyecto cuyo rostro más visible es el tren, conlleva la fundación de nuevos centros urbanos para miles de personas y la consolidación del turismo en el sur de Quintana Roo, con Bacalar como eje articulador; se trata de un proyecto con un enorme impacto para el ya degradado medio ambiente y para la convulsionada sociedad. Un proyecto capitalista de beneficio para los grandes inversionistas en el que el pueblo maya tendrá seguramente el mismo desastroso destino que los trabajadores de Cancún y la Riviera Maya viven hoy, desamparados sin ningún tipo de seguridad social y acorralados por el crimen organizado y la descomposición social.

El Tren se impone violentando los derechos de libre determinación de los pueblos originarios, sin presentar estudios ambientales y de impacto social y desoyendo a la población maya que legítimamente defiende sus tierras y territorios. Fonatur afirma que “el Tren generará empleos, detonará la economía de la región y desarrollará infraestruc-

tura con servicios básicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes”, también señala que el proyecto cuenta con el respaldo y la colaboración de ONU-Habitat quienes diseñarán junto con las comunidades los planes de desarrollo regional con un enfoque incluyente y sustentable.

El presidente dictó: “Esta obra requiere hoy más que nunca, la apertura de caminos, la construcción de ferrocarriles, muelles y otra multitud de trabajos materiales, así como de providencias administrativas que apresuren la población de aquellas regiones, atrayendo elementos sanos y laboriosos que los colonicen para asegurar su futuro sosiego, y procurando en esa población exótica se funda poco a poco la indígena...”. No se trata de un decreto del presidente López Obrador sino de Porfirio Díaz al crear el Territorio Federal de Quintana Roo en 1902, pero bien podrían ser palabras del Ejecutivo en turno. El objetivo es de nuevo, la colonización y la explotación de los bienes del pueblo maya.

[VERSIÓN COMPLETA EN LÍNEA >>](#)



Punta Nizuc, Cancún, Quintana Roo en 1978.

Lo que dicen en Quintana Roo del Tren Maya

Paloma Escalante Gonzalbo ENAH

Para opinar sobre cualquier tema hay que tener información. Sobre el proyecto del Tren Maya hemos observado que falta mucha información, particularmente sobre las poblaciones involucradas: ¿Qué saben? ¿Qué piensan? ¿Qué esperan? ¿Qué les preocupa? Estas son algunas de las preguntas que han guiado una investigación realizada por cuatro antropólogas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad de Quintana Roo.



Mercado de Carrillo Puerto.

Decidimos recorrer los pueblos que se encontrarían en la ruta del tren para observar, hacer cuestionarios y realizar trabajo etnográfico y entender realmente lo que la gente piensa y siente, teme, o espera del Tren Maya. Nuestra sorpresa fue grande desde el principio. Encontramos que la gente sabía mucho sobre el proyecto y deseaba mucho más de lo que habíamos imaginado que se llevara a cabo. A lo largo de nuestros recorridos encontramos un sentimiento de esperanza en la mayoría de los pobladores: “Por fin alguien hace algo por nuestro estado”, “Ahora sí vamos a tener trabajo”, “Mi presidente es del pueblo, lo que haga va a ser para el pueblo”. Estas expresiones y otras semejantes fueron una constante. También fueron muchos los testimonios que recogimos sobre la angustia de no tener oportunidades de empleo, la imposibilidad de trabajar el campo, sobre todo ahora que desde hace al menos 5 años no llueve lo necesario para la agricultura.

Para nuestro trabajo, dividimos el estado en tres regiones de acuerdo con sus características culturales y socioeconómicas: el norte, dedicado al turismo desde 1974; el centro que es la zona maya y rebelde desde la Guerra de Castas en 1847, y el sur, que es una región surgida a partir de la creación de Nuevos Centros de Población Ejidal (NCPE) en los años setenta. Esta zona es fronteriza con Belice, a orillas del Río Hondo. Es una parte predominantemente agrícola y forestal, pero con escasas posibilidades de desarrollo. En ella se encuentran importantes sitios arqueológicos, unos abiertos, otros en exploración y otros aun por trabajar. Cuenta con bellezas naturales como cenotes, lagunas y selva que los pobladores desean aprovechar para tener un ingreso por el turismo.

Además del recorrido y trabajo de campo por las poblaciones, analizamos las estrategias de comunicación de Fonatur y el proceso de consulta a los pueblos. A partir de ello hacemos recomendaciones para que se realicen las cosas de la mejor manera. También nos informamos con arqueólogos sobre la situación de los vestigios que se encuentran a lo largo del trazo propuesto para la ruta del tren y uno de ellos nos ha explicado cómo se puede hacer la exploración y salvamento para que no se pierdan elementos importantes del patrimonio arqueológico.



Atardecer en Nicolás Bravo.

Al llegar a Calakmul, observamos que la parte por la que pasará la vía atraviesa la zona decretada como Reserva de la Biosfera, por la parte más angosta y a la par de la carretera, por lo que será mínima la afectación. En un principio existió un plan para introducir la vía en la selva, pero esto se ha descartado, así como la idea de un asentamiento urbano de grandes dimensiones. El plan consiste en que pase la vía a la par de la carretera. Lo mismo ocurre con la reserva de Sian Kaan, que no se verá afectada, ya que queda a un lado y fuera del trazado de la vía.

Hemos investigado la situación de las poblaciones más frágiles: Bacalar y Tulum y hemos concluido que ya no se puede incrementar la presión demográfica en esos lugares, por lo que es necesario modificar la ubicación de la estación en Bacalar y controlar el crecimiento en Tulum. Es importante que se deje muy claro con Fonatur y las instancias responsables del proyecto que si se busca realmente el desarrollo y el crecimiento regional no se deben volver a impactar los lugares ya sobreexplotados. Es necesario en cambio, abrir nuevos, poner estaciones en los lugares que las necesitan y que tienen mucho que ofrecer, incluso al turismo, pero que no son conocidas.

Trabajamos en algunas comunidades solo por un día o dos y en otras por periodos más largos, para tener algunas muestras con más profundidad. En el sur estuvimos en Huay-Pix, Juan Saravia, Nachicocom, Morocoi, Francisco Villa, Nicolás Bravo, Bacalar, Miguel Hidalgo, Andrés Quintana Roo, Limones; en la Zona Maya en Uh-May, Señor, Ixpichil y Carrillo Puerto; en el norte sólo trabajamos Tulum hasta el momento, pues la investigación continúa.

Sólo como botón de muestra algunos testimonios: en Huay Pix, una de las primeras personas entrevistadas fue una mujer de cuarenta y cinco años en silla de ruedas: “Hace siete años que tuve este accidente y mismos siete años que hace que no he vuelto a ver a mi mamá, porque en los autobuses no se pueden subir sillas de ruedas. Ahora con el tren voy a ir, la voy a ver, sólo espero que se termine antes de que muera mi mamá.”

Un señor de 78 años en Miguel Hidalgo recuerda: “Yo sí he viajado en tren y sé de lo que hablo, sería fabuloso que llegara. La gente no se imagina lo cómodo, lo barato, es bien para todos, hasta para los taxistas que se quejan, van a tener más trabajo, porque el tren no va a parar en todos los pueblos y ellos van a llevar el pasaje a las estaciones”.

Una mujer de unos 60 años en Uh May: “Pues no sé por qué le dicen maya, si maya no es, pero que haya el tren, eso espero, nos hace falta todo, el transporte, el trabajo, hasta el turismo y hasta aquí yo le he pensado ¿no le gustaría más a un turista venir y conocer la verdadera milpa maya, la verdadera comida los pueblos de verdad y no lo que les ponen a los turistas que ni es de verdad”.

Un hombre joven en Limones: “Lo que no se puede es que no se haga nada, por fin alguien que hace algo por nuestro pueblo, por nuestra tierra, ojalá que sí se haga el tren. Si no, ¿qué nos puede quedar? Los que dan trabajo son los criminales y eso al final nos mata, no es nuestro sueño, no es nuestra vida”.

El trabajo consta también de entrevistas a especialistas, personas que tienen algún saber particular. Tal es el caso de la entrevista realizada con el líder del centro ceremonial maya “Áak Baám Kée”, que se opone al proyecto del tren y considera que abonará al aumento de la situación de despojo y discriminación. Una antropóloga y activista medioambiental que trabaja en Bacalar nos explicó la problemática de esa comunidad y expresó dudas sobre la conveniencia del proyecto.

En general las personas piensan que se beneficiarán con el medio de transporte seguro y económico, que podrán transportar también sus mercancías y que recibirán apoyo para poder explotar los recursos o atractivos turísticos de sus localidades. De esta manera, sus hijos ya no tendrán que migrar, puesto que habrá fuentes de trabajo en sus propias comunidades.

También hemos considerado la violencia en el estado y la relación que pudiera tener con el crecimiento económico o con el cambio de vocación productiva de la región. Pensamos que un proyecto federal de estas características será importante para revertir la tendencia de incremento de la violencia, ya que ayudará a fracturar las estructuras del crimen organizado que se han enquistado en Quintana Roo debido a la ausencia de oportunidades económicas para la población. Hemos identificado que cada zona del estado tiene una situación diferente, así como necesidades, problemas propios y necesidades específicas en torno al proyecto del Tren Maya. Todo ello se expone detalladamente en este blog, en el que estamos dando a conocer los resultados de la investigación: <https://trenmayenquintanaroo.blogspot.com/> •